

PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS

Pilar Izaguerri
Teseida García
Susana García-Baquero
Miguel Armenteros León

Protección de víctimas de trata de seres humanos

PILAR IZAGUERRI
TESEIDA GARCÍA
SUSANA GARCÍA-BAQUERO
MIGUEL ARMENTEROS LEÓN



Edita: Programa EL PAcCTO
Calle Almansa 105
28040 Madrid (España)
www.elpaccto.eu

Con la coordinación de:



Autores:

Pilar Izaguerri

Teseida García

Susana García-Baquero

Miguel Armenteros León

ISBN: 978-84-09-23304-5

Edición no venal

Madrid, abril de 2020



No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del programa EL PAcCTO y, en ningún caso, debe considerarse que refleja el punto de vista de la Unión Europea.

Índice

Introducción	5
Los problemas y posibilidades de repatriación de víctimas a sus países de origen, por Pilar Izaguerri.....	6
El derecho de repatriación	6
La regulación en España	8
Las bases a tener en cuenta	9
Conclusiones	11
El intercambio de información y la problemática de la trata de seres humanos en América Latina, por Teseida García.....	12
Planteamiento	12
Metodología	13
Problemas detectados.....	13
Soluciones y conclusiones propuestas	16
La necesidad de establecer un modelo de colaboración transfronteriza para la identificación, asistencia y protección jurídica de víctimas de trata de seres humanos, por Susana García-Baquero y Miguel Armenteros León	19
Planteamiento	19
Legislación interna de Chile, Bolivia y Ecuador.....	19
Instrumentos de cooperación jurídica internacional entre Chile, Bolivia y Ecuador	41
Referencia al modelo de la Unión Europea.....	47
La necesidad de establecer protocolos comunes de actuación	48
Conclusiones	60

PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS

Introducción

Por trata de seres humanos se entiende el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, el secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su explotación. La explotación comprende, como mínimo, la explotación de la prostitución de otras personas u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos.

Sin duda nos encontramos ante el fenómeno delictivo propio de la delincuencia organizada que mayor preocupación genera y que alcanza a un importante número de víctimas que se encuentran en situaciones muchas veces difíciles.

El programa EL PAcCTO ha desarrollado diversas actividades relacionadas con esta materia y ha alcanzado un número importante de conclusiones y propuestas de una gran especialización que han servido o deben servir para los cuerpos policiales encargados de la investigación y de las Fiscalías, tanto en el marco nacional como especialmente en el internacional en el ámbito de la AIAMP.

Precisamente en este marco internacional, un conjunto de expertos ha aportado sucesivas propuestas complementarias en las que han ahondado en el tratamiento de las personas que son víctimas de la trata para encontrar las vías para alcanzar una protección personal, asistencial y jurídica y, a la vez, garantizar que los medios probatorios, incluidas las declaraciones de las víctimas, puedan tener efectos en el marco de un juicio con todas las garantías.

El presente volumen recoge los elementos fundamentales de estas valiosas aportaciones.

Antonio Roma Valdés

Coordinador del componente de cooperación entre sistemas de justicia

Los problemas y posibilidades de repatriación de víctimas a sus países de origen, por Pilar Izaguerri

El derecho de repatriación

El derecho a la repatriación o retorno voluntario forma parte incuestionablemente del elenco de derechos internacionalmente reconocidos a las víctimas de la trata y, por tanto, de la imperativa protección que los Estados han de conferir a las víctimas de este delito.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 establece el retorno al país de origen como un derecho universal y fundamental bajo el artículo 13, que establece que “toda persona tiene derecho a abandonar un país, incluyendo el propio, y a regresar a su país”. El concepto de “retorno voluntario” puede definirse como “el retorno asistido o independiente al país de origen, de tránsito u otro país, con base en la voluntad de quien regresa”.

Cuando se habla de víctimas de trata, que a su vez son en la mayoría de las ocasiones emigrantes de sus países de origen, es incuestionable que integra la recuperación de las víctimas, y ha de ser una obligación para los Estados prever y articular políticas eficaces que garanticen y materialicen el derecho de retorno.

Este derecho viene expresamente recogido en el artículo 8 del Protocolo de Palermo de 2000, que desarrolla la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños en el art. 8. De igual forma, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, firmado en Varsovia (2005), también lo prevé en su art. 1666.

El párrafo 1 del artículo 8 del protocolo obliga a los Estados parte a facilitar y aceptar la repatriación de un nacional “teniendo debidamente en cuenta su seguridad”. Esta cláusula impone a los Gobiernos la obligación positiva de asegurar que no haya riesgo de que la persona objeto de la trata que regresa a su país de origen se vea expuesta a represalias u otros daños, como la detención por haber abandonado el país o haber trabajado en la prostitución en el extranjero, cuando esas actividades estén tipificadas como delitos en el país de origen. La expresión “sin demora indebida o injustificada” no significa que los Gobiernos puedan deportar inmediatamente a todas las personas objeto de trata. Deben disponer la repatriación de la persona objeto de trata solo después de que hayan tenido oportunidad de determinar que todos sus derechos legales relacionados con la obtención de justicia y seguridad tras el regreso quedan salvaguardados.

Si la víctima alegara la existencia de riesgo en caso de repatriación, debemos tener en cuenta la evaluación del peligro por represalias de las redes de trata de personas contra la víctima y su familia, la capacidad y la voluntad de las autoridades del país de origen de proteger a la víctima y a su familia contra posibles actos de intimidación o violencia, la posición social de la víctima a su regreso, el riesgo de arresto, de detención o enjuiciamiento de la víctima por las autoridades de su país de origen por delitos relacionados con la trata de personas (como el uso de documentos falsos y la prostitución), la disponibilidad de asistencia y las oportunidades de empleo a largo plazo.

Las organizaciones no gubernamentales y otros organismos de servicios que trabajan con víctimas de la trata de personas deben tener derecho a presentar información sobre esos aspectos, información que a su vez habrán de observar las autoridades competentes al tomar cualquier decisión relativa a la repatriación o deportación de las víctimas. Ahora bien, para poder repatriar a una víctima será necesaria la colaboración internacional. En este sentido, no podemos olvidar que para la convención y los protocolos la cooperación internacional es fundamental, sobre todo, para la persecución y la debida sanción del mismo. Esta cooperación no debe circunscribirse únicamente a la cooperación policial, de intercambio de información o de asistencia penal mutua, sino que además, y en aras de hacer efectivo este derecho, será necesaria también entre administraciones a fin de lograr impulsar y culminar tratados internacionales, o convenios bilaterales que permitan ejecutar la repatriación, facilitando la expedición de documentos de viaje para las víctimas que carezcan de ellos y que la permitan viajar con seguridad y asegurar su protección una vez ejecutada la misma, por lo que también será necesaria la cooperación con organizaciones no gubernamentales que ayuden a aquella tanto en el país receptor como en el de origen, para que así se establezcan programas de apoyo a la víctima que vuelve a su lugar de origen. No hemos de olvidar que la víctima que regresa a su lugar de origen suele seguir necesitando ayuda y asistencia.

El retorno y la reinserción suelen ser procesos difíciles en los que las víctimas se enfrentan a problemas psicológicos, familiares, de salud, jurídicos y económicos. Muchas veces tienen dificultades para reinsertarse en sus familias y comunidades. La asistencia para la reinserción debe ser parte integrante de los programas de retorno voluntario, para así llegar a las causas fundamentales de la trata y evitar que las víctimas vuelvan a caer en manos de traficantes después de su retorno. Algunos elementos de reinserción que deben incluir estos programas son, entre otros, la asistencia médica y psicológica, la protección de seguridad, la formación profesional, la orientación laboral, el empleo subvencionado, el autoempleo y el microcrédito adaptado a cada caso; todo ello para mejorar las condiciones de vida de las víctimas en sus países de origen.

El retorno de la víctima debe estar sujeto a un procedimiento específico que deberá estar regulado, pues de esta manera se garantizará también la legalidad del mismo y se evitarán abusos.

Este procedimiento consta de las siguientes fases:

1. **Identificación.** El proceso comienza con una solicitud de retorno o repatriación que presenta la víctima, una institución o una organización de asistencia a víctimas en el estado receptor. En ese momento hay que comprobar que la víctima efectivamente quiere volver a su país de origen (en caso de repatriación voluntaria) o que ha de volver (en caso de deportación), y hay que obtener la siguiente información:
 - Quién es la víctima (nombre, dirección en el país de origen y documentos de identidad, si están disponibles).
 - Dónde reside la víctima actualmente (incluidos sus datos de contacto).
 - Con quién desea reunirse (nombres, parentesco con la víctima y dirección).
2. **Búsqueda de la familia.** En el estado de origen, la organización de apoyo debe localizar o buscar a la familia de la víctima. La finalidad de esta búsqueda es comprobar que dicha familia existe y que tiene parentesco con la víctima, para asegurarse de entregar a esta a la persona debida y obtener la dirección actual de la familia.
3. **Evaluación de la familia.** La reunificación nunca es un retorno a la situación anterior al incidente de la trata. La víctima, en muchos aspectos, no es la misma persona que antes, y la familia ha pasado por experiencias. La evaluación de la familia sirve para determinar si debe procederse a la reunificación y, en caso afirmativo, prepararla. También se evalúan las necesidades de la familia para decidir si hace falta postratamiento y de qué tipo. Debe informarse a la víctima del resultado de la evaluación para confirmar que desea volver con su familia en las condiciones en que esta se encuentra en esos momentos. Para lograr una reunificación y reinserción satisfactorias, la evaluación de la familia debe incluir:

- Las causas del incidente de la trata (o, en algunos casos, las razones por las que la víctima abandonó a su familia).
 - La situación socioeconómica de la familia.
 - La actitud de los padres y familiares ante la posibilidad de la reunificación.
4. **Preparar el viaje.** La víctima necesita ayuda para obtener los documentos de viaje necesarios y otros documentos pertinentes, así como para realizar las gestiones que se precisen. Para su seguridad, debería viajar acompañada en los dos países. Las organizaciones que ayuden a la víctima en el estado receptor y en el país de origen deben coordinar su retorno (también con las autoridades de inmigración y gubernamentales, si se trata de un retorno oficial). Ello es necesario para garantizar un apoyo continuo a la víctima y por su seguridad.
5. **Apoyo psicológico y emocional.** Es muy importante ayudar a la víctima que se va a repatriar a prepararse psicológica y emocionalmente para el retorno y la reunificación. Es posible que también se necesite el apoyo de parientes y amigos en el lugar de origen.

La regulación en España

España articula el derecho de retorno de las víctimas de trata de seres humanos en el art. 59 bis de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Ciudadanos Extranjeros en España, que extiende su aplicación tanto a ciudadanos extracomunitarios como de la Unión Europea (en virtud de la disposición adicional **única** del RD 577/2011). Desarrolla y aplica su previsión conforme a los programas e instrumentos facilitados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Para la OIM el retorno voluntario asistido y la reintegración es un componente indispensable del enfoque integral de la gestión de la migración, cuyo objetivo es lograr el retorno y la reintegración ordenados y en condiciones humanas de los migrantes que no pueden o no desean permanecer en sus países de acogida y desean volver voluntariamente a sus países de origen. La implementación acertada de estos programas requiere la cooperación y participación de un amplio abanico de interlocutores, incluidos los migrantes, la sociedad civil y los Gobiernos, tanto de los países de acogida como de origen. Las alianzas entre la OIM y las diversas partes interesadas nacionales e internacionales son esenciales con miras a la implementación eficaz de dichos programas, desde la etapa previa al retorno hasta la etapa de reintegración.

Desde 1979, a través de la OIM se ha prestado asistencia a 1,3 millones de migrantes. En los últimos 10 años se ha prestado asistencia a más de 300.000 migrantes y cada año se ayuda a un promedio de 30.000 migrantes.

Para los migrantes que deben regresar a su país de origen pero carecen de los medios para hacerlo, los programas de retorno voluntario asistido y reintegración son la única solución para su problema inmediato. Entre los beneficiarios la OIM cita a solicitantes de asilo rechazados, migrantes desamparados, **víctimas de la trata de personas** y otros grupos vulnerables, incluidos migrantes menores no acompañados o migrantes con necesidades sanitarias.

Como parte de la labor fundamental de la OIM, las actividades relacionadas con el retorno voluntario asistido y la reintegración ofrecen apoyo esencial a miles de migrantes que regresan a su país de origen cada año. Los programas promueven el diálogo internacional y la cooperación en materia de gestión de la migración entre los países de acogida y origen. Los servicios de asistencia para la reintegración de migrantes en sus países de origen son un elemento esencial para asegurar la sostenibilidad de los retornos. La OIM y sus asociados en los países de origen ofrecen a los migrantes apoyo socioeconómico para promover su autosuficiencia y contribuciones a sus comunidades. Concretamente, la sostenibilidad de los retornos solo puede asegurarse si se acompaña del desarrollo socioeconómico.

Las bases a tener en cuenta

En los países de acogida:

- Concienciación sobre retorno voluntario asistido y reintegración.
- Acopio de información sobre el país de origen.
- Elaboración de los perfiles de las diásporas.
- Actividades de contacto y difusión de información a comunidades de migrantes, incluidos sistemas de derivación a servicios públicos.
- Asesoramiento individual en materia de asistencia para el retorno y la reintegración, incluida información sobre el país de origen.
- Servicios especializados de asistencia y derivación para personas en situación de vulnerabilidad.
- Alojamiento temporal.
- Tramitación de la documentación de viaje.
- Organización del viaje.
- Suministro de acompañantes, en caso de ser necesario.

En países de tránsito:

- Asistencia de viaje en tránsito.
- Asistencia con acompañante en tránsito, en caso de ser necesario.

En países de origen:

- Asistencia durante los trámites de migración y aduanas al llegar al aeropuerto.
- Preparativos para la recepción consecutiva a la llegada, incluyendo información y derivación a asociados locales, si es necesario.
- Viajes hasta el destino final.
- Asistencia para la reintegración a corto y medio plazo (dependiendo del proyecto correspondiente y de los recursos aportados por los donantes), incluida la instalación de negocios, la capacitación profesional, la instrucción formal, la asistencia médica y otros tipos de asistencia adaptados a las necesidades específicas de cada persona que retorna.
- Actividades de fortalecimiento institucional, incidiendo en: vincular el retorno con el desarrollo local, posibilitar el acceso a servicios, fortalecer las redes locales y mejorar la capacidad local a fin de prestar asistencia para la reintegración.

La Constitución de la OIM estipula que debe asegurar una migración ordenada, entre otras formas, mediante la asistencia para el retorno voluntario y la reintegración. En particular, la OIM pone de relieve que el carácter voluntario es un requisito esencial para todas sus actividades de retorno voluntario asistido y reintegración. En línea con su mandato, las consideraciones clave en materia de políticas para el desarrollo e implementación de dichos proyectos incluyen:

- Salvaguardar la dignidad y los derechos de los migrantes al concretar los retornos, velando por el cumplimiento de los principios y las normas internacionales correspondientes.
- Preservar la integridad de las estructuras migratorias y procedimientos de asilo ordinarios.
- Fomentar el diálogo y la cooperación entre los países de origen, tránsito y acogida que participen en el proceso de retorno y reforzar la responsabilidad de los países de origen respecto de sus nacionales que retornan.
- Abordar, en la medida de lo posible, las causas que originan la migración irregular.
- Abogar por la adopción de enfoques integrales respecto del retorno voluntario, incluida la asistencia para la integración posterior al retorno.
- Trabajar con asociados nacionales e internacionales tanto en países de acogida como de origen, para promover el diálogo internacional e implementar actividades de fortalecimiento institucional para las actividades de retorno voluntario asistido y reintegración.

Así la OIM ha ejecutado el denominado proyecto CARE (Método Coordinado para la Reintegración de las Víctimas de Trata). Implementado desde septiembre de 2013 hasta diciembre de 2015, el objetivo del proyecto CARE era ofrecer una asistencia flexible y personalizada que ayudara al retorno de las víctimas de trata desde Austria, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, España y el Reino Unido, para que volvieran a convertirse en miembros activos de sus comunidades. Más concretamente, el proyecto implementó un método coordinado e integrado para el suministro de asistencia previa a la salida, posterior a la llegada y de reintegración para víctimas de TSH tanto adultas como menores de edad. Se proporcionaba un apoyo integral (incluyendo, entre otros, asistencia a la integración económica, apoyo psicosocial, alojamiento temporal, etc.) basado en las necesidades individuales de las víctimas de TSH, que les permitiera recorrer el periodo de transición con la mayor facilidad posible, reduciendo el riesgo de recaída. Hasta el 31 de octubre de 2015, 66 víctimas de trata de seres humanos se han registrado en el proyecto CARE, de las cuales 58 son mujeres y 8 son hombres. 43 beneficiarios del proyecto ya han regresado a su país de origen. Los principales países de origen de beneficiarios del proyecto son: Nigeria (27), China (7), Brasil (6), seguidos de Albania (4) y de países del sureste asiático: Filipinas (3), Vietnam (2) y Malasia (2). Los principales países de registro de casos son Francia (29), España (18), Reino Unido (14), Austria (4) y Portugal (1).

En otro orden de cosas, y sin perjuicio de que los Estados puedan establecer cuál de ellos se hace cargo de ejecutar el proceso de repatriación, lo cierto es que en la actualidad es la OIM la que está facilitando con sus recursos las repatriaciones a través de programas específicos en los que España ha intervenido, siendo la Secretaría de Estado de Emigración e Inmigración la que asume la gestión de la ejecución. En cualquier caso, España no tiene firmado ningún convenio de repatriación de víctimas de trata de seres humanos. Sin embargo, y sin perjuicio de la participación de España en los proyectos de repatriación de la OIM, de acuerdo con la información que España ha remitido al Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA, por sus siglas en inglés) del Consejo de Europa en 2017, las repatriaciones de víctimas que ha gestionado nuestro país fueron de 29 personas, todas mujeres, en 2013; 12 personas, todas mujeres, en 2014; 24 personas, de las que 21 fueron mujeres y 3 hombres, en 2015; 45 en 2016; y 15 personas en los primeros 5 meses de 2017. La mayoría de los retornos lo fueron a países de Latinoamérica, Nigeria y Rumanía, sin que ninguno haya sido un retorno no voluntario. El Consejo de Europa, a través del informe del GRETA de 2018, ha recomendado a España que siga reforzando las garantías de derechos, dignidad y seguridad de las víctimas, evitando la posible devolución de víctimas de trata de seres humanos que no hayan sido correctamente identificadas y que se encuentran en los centros de internamiento para extranjeros. Además, recomienda a España que desarrolle convenios de cooperación con los países de origen para facilitar los retornos con las adecuadas garantías de seguridad y sin riesgos.

Conclusiones

Resulta deseable marcar algunas pautas o recomendaciones que cada Estado debería valorar y aplicar en aras de la protección de las víctimas de trata y de una satisfactoria repatriación de aquellas:

- La persona víctima de trata ha de poder solicitar el retorno asistido a su país de procedencia tanto para ella como para sus hijos menores o con discapacidad desde el momento en que sea identificada como tal.
- Los órganos estatales competentes deberán facilitar la gestión y asistencia del retorno voluntario de la víctima y de sus hijos e hijas menores o con discapacidad conforme a las recomendaciones internacionales y utilizando los programas y cauces más eficaces.
- El retorno asistido comprenderá la evaluación, previa a la partida, de los riesgos y la seguridad, el transporte, así como la asistencia en los puntos de partida, tránsito y destino. Las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas de trata podrán, en los casos que se estime conveniente, proponer la inclusión de la víctima en el programa de retorno voluntario de atención social destinado a inmigrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por estar en riesgo de exclusión social.
- Desde un punto de vista práctico, el retorno de la víctima supone privar de elementos probatorios de interés tanto a la investigación policial como, especialmente, al procedimiento penal, de ahí la conveniencia de preconstituir su declaración en sede judicial antes de que el mismo se realice y de requerirla para que designe un domicilio en su país de origen, por si fuera necesaria una ampliación de su testimonio o la práctica de cualquier otra diligencia con la misma.
- Debe valorarse con prudencia la posibilidad del retorno asistido, fundamentalmente desde la perspectiva de la protección de la víctima, de cara a evitar que pueda ser nuevamente objeto de las organizaciones criminales dedicadas a la trata de seres humanos.

El intercambio de información y la problemática de la trata de seres humanos en América Latina,

por Teseida García

Planteamiento

La trata de seres humanos es, en palabras de las Naciones Unidas, uno de los delitos más graves y más lucrativos. Es un delito muy grave para la humanidad, puesto que afecta directamente a la dignidad de la persona, que es en síntesis la cualidad que define al ser humano y lo separa de las cosas y de los animales, además de ser la cualidad a partir de la cual tienen su origen lo que denominamos derechos fundamentales. Y según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) es el segundo delito más lucrativo del mundo, detrás del tráfico de armas y por encima del tráfico de drogas, generando unos beneficios según el último informe realizado por dicha institución en la materia de más de 3.000 millones de dólares al año.

Las Naciones Unidas fue la primera institución mundial que se preocupó decididamente de realizar una regulación que abarcara todos los aspectos de la trata de seres humanos, esto es, su prevención, su persecución y su posible sanción como delito. La misma cristalizó en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, conocido popularmente como Protocolo de Palermo, que complementa a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Crimen Organizado Transnacional (aprobada por Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000).

Se ha mantenido tradicionalmente que este delito, además, reúne las características de transnacionalidad y organizado. A ello contribuyó que la regulación de dicho delito estuviera subordinado a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Crimen Organizado, de forma que era totalmente necesario que, para poder aplicar el protocolo, estuviéramos ante un supuesto de organización transnacional. Sin embargo, esta postura fue superada incluso por las Naciones Unidas, como expresa en su último informe de 2016, al entender que efectivamente la trata de seres humanos podía cometerse sin una organización y sin ser transnacional, es decir, la trata de seres humanos también podía ser doméstica y afectar a un solo Estado. A ello contribuyó decididamente el Consejo de Europa, cuando en el Convenio sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, realizado en Varsovia el 16 de mayo de 2005, estableció en su artículo 2 que el mismo se aplicaría a toda clase de trata de seres humanos “sean nacionales o transnacionales y estén o no vinculadas a la delincuencia organizada”.

Por último, a nadie se le escapan las dificultades que el delito presenta. No solo son dificultades de índole sustantiva o de derecho material, pues de la definición del delito es fácil observar su complejidad técnica, sino que también viene acompañado de una dificultad probatoria importante. Así pues, hay que probar una acción, un medio y un fin, y existen conceptos jurídicos de difícil demostración, como “vulnerabilidad” o “situación de necesidad”.

Por otro lado, y a pesar de que se ha superado la concepción del delito como transnacional y organizado, la realidad nos demuestra que en el actual mundo globalizado en el que vivimos la delincuencia carece de fronteras, de forma que se aprovechan de los sistemas judiciales de cada Estado para evitar o dificultar su persecución y, por ende, la sanción penal a su grave conducta. Y no hemos de olvidar que igual de importantes son las políticas de prevención del delito, la protección de la víctima de trata de seres humanos y una adecuada persecución y sanción de las conductas, que a la postre también ayudan a la prevención y protección de las víctimas.

Así pues, si combinamos las dificultades técnicas probatorias y jurídicas del tipo delictivo con la alta probabilidad de que el delito se cometa a través de una organización y que además sea transnacional, la conclusión natural es la necesaria coordinación y cooperación entre las autoridades judiciales y policiales de los distintos Estados afectados en la lucha de este grave delito, tanto para la obtención de información como de pruebas válidas que permitan la desarticulación y sanción completa de los tratantes allí donde se encuentren.

Por este motivo, es necesario fomentar el conocimiento y confianza de los agentes implicados, siendo policías y fiscales los principales destinatarios de los programas para la capacitación, formación y comprensión de los problemas a los que se enfrentan a la hora de combatir estos delitos, para lo cual se revela de capital importancia la puesta en común de aquellos problemas a los que diariamente hay que dar respuesta.

Por este motivo, talleres como el propuesto por EL PACCTO son de gran utilidad y esenciales para fomentar ese conocimiento común no solo de los fiscales y policías que día a día, en los distintos Estados, deben abordar el delito, sino también el conocimiento de los aspectos y dificultades jurídicas que ese delito está provocando en cada uno de los Estados.

Metodología

Para poder cumplir con el objetivo del taller, consistente en la obtención de información y posterior identificación de los problemas y posibles soluciones, se realizó una metodología activa y participativa de todos los asistentes pertenecientes a las Fiscalías de los Estados participantes. Concretamente, por la dirección se identificaban algunas cuestiones controvertidas relativas a varios bloques temáticos: cuestiones de derecho material, cuestiones sobre la investigación y prueba, cuestiones sobre la protección de la víctima y, por último, cuestiones relativas a la cooperación jurídica internacional. De esta manera, cada participante iba poniendo de manifiesto las dificultades existentes, así como las soluciones que su propio ordenamiento jurídico había arbitrado a las dificultades que sí existían sobre las mismas cuestiones en otros Estados. De esta forma se podía poner en común la posibilidad de adaptar esa solución a otros Estados, y también la búsqueda de soluciones comunes.

Al final del taller, y a través de esta metodología, se pudo obtener una visión práctica de las distintas regulaciones que del delito existían en los países participantes: no solo regulaciones que afectaban al derecho procesal penal *stricto sensu*, sino también al delito de trata de seres humanos, existiendo en muchos Estados una ley integral, en tanto que en otros solamente existía una regulación expresa en el Código Penal.

Problemas detectados

Hemos de poner de manifiesto que, sin excepción, los participantes de todos los países detectaban los mismos problemas en el abordaje profesional del delito de trata de seres humanos, y que además se llegaban a las mismas conclusiones y posibles soluciones. Nos detendremos por ahora en los problemas detectados.

En materia de derecho material

El primero de los problemas radica en la concepción del propio delito de trata de seres humanos como un delito que afecta a la dignidad del ser humano. Esta afirmación nos lleva a la conceptualización del bien jurídico protegido. Así, existen concepciones que determinan que el bien jurídico es la libertad, en cuanto que para otros es la dignidad. Y dependiendo de ello, se regula en los textos legales en los delitos contra la libertad o no. No hay que olvidar que detrás del delito, lo que subyace y late es un atentado a la dignidad de la persona que permite su cosificación y, por tanto, su mercantilización. Si bien la finalidad de la explotación es lo que caracteriza el delito de trata de seres humanos, en muchas ocasiones esa finalidad se identifica con una lesión a la libertad de la víctima (libertad sexual la mayoría de las veces), pero es difícil encuadrar esta afectación de la libertad en otras finalidades que caracterizan la trata de seres humanos.

Ligado a la afectación de la dignidad, se detectó que había países que entendían que independientemente de las víctimas de trata que fueran identificadas en cada caso, solo existía un solo delito de trata de seres humanos. Los fiscales participantes estaban de acuerdo en que, si el bien jurídico protegido era la dignidad, esta era única para cada persona y víctima y por tanto debían existir tantos delitos como víctimas. Sin embargo, se admitía esa solución jurídica en tanto que las penas aparejadas al delito eran altas, y a través de esta fórmula las mismas eran suavizadas.

Otro de los problemas es el relativo a los concursos. No existe unidad a la hora de abordar la cuestión como concurso real o como concurso ideal. Nuevamente subyacía la cuestión penológica en esta cuestión.

En materia de persecución y nuevas fórmulas de investigación

En esta materia también existen problemas comunes que afectan a los distintos Estados y que derivan claramente del tipo delictivo que nos encontramos. Existe acuerdo en entender que, dado que estamos ante una realidad social compleja, es necesaria la especialización de la Fiscalía y los cuerpos policiales, y así ocurre en la mayoría de los casos. Así, la mayoría de los países cuentan con una Fiscalía especializada en trata de seres humanos, o bien este delito es asumido por aquellas secciones de la Fiscalías encargadas de los delitos de criminalidad organizada, especializando a fiscales en dichas áreas.

También existe acuerdo en valorar muy positivamente los sistemas acusatorios que han sustituido a los antiguos sistemas inquisitivos imperantes en los sistemas procesales iberoamericanos hasta hace relativamente poco tiempo. El último país en incorporarse a este sistema ha sido Argentina, que lo está haciendo progresivamente en la actualidad. España es el único país que sigue con un sistema inquisitivo de investigación.

En materia de persecución sigue siendo un problema la práctica de la prueba anticipada, y sobre todo su reproducción en el juicio oral, pues la mayor parte de las veces las víctimas se retractan de sus declaraciones y además su nueva declaración incide en la revictimización secundaria. En algunos países se utiliza la cámara Gesell para tomar declaración, considerándose bastante apropiado para estas víctimas, pues además se cuenta con informes psicológicos que avalan la consideración de la vulnerabilidad y verdadera situación de estas víctimas. El cambio de versión de la declaración de la víctima en el juicio oral es demoledor para las pretensiones y acusaciones mantenidas por el fiscal tras una compleja preparación e instrucción de la causa, puesto que la declaración de la víctima sigue considerándose la prueba estrella y principal de este tipo de delitos, siendo común que las sentencias se fundamenten en el resultado de la misma fundamentalmente, obviando otros medios de prueba.

Por ese motivo, se considera necesario contar con más material probatorio que pueda neutralizar las retractaciones de las víctimas y que puedan explicar al tribunal los motivos que llevan a realizar esa acción a las víctimas. Son comunes los seguimientos, las intervenciones telefónicas

y los registros en domicilios. Sin embargo, parece que sí se detectan problemas a la hora de solicitar nuevos medios de prueba, como las intervenciones de nuevas formas de comunicación como el WhatsApp, Telegram y Facebook, ya que existen problemas técnicos para poder obtener las comunicaciones.

Otra de las pruebas que cada vez se hace más necesaria es el llamado agente encubierto informático, que está poco desarrollado y que debería introducirse cada vez más en estas investigaciones.

Pero no hay que olvidar que la trata de seres humanos tiene su razón de ser en los casos más comunes (fines de explotación sexual, laboral, órganos), en la voluntad de los autores de enriquecerse por la explotación de otra persona. Por este motivo, las investigaciones patrimoniales deben ser paralelas y simultáneas a la investigación de este delito. Hay que adoptar medidas cautelares de carácter real que embarguen bienes o cuentas corrientes, cierren locales y fábricas, las cuales impedirán que durante el curso de la investigación los autores puedan seguir beneficiándose de lo que ya han conseguido con la explotación de las víctimas. En este sentido, se evidencian problemas en la coordinación de ambas investigaciones, puesto que los fiscales especialistas en trata de seres humanos no son los competentes en estas investigaciones. Además, se considera que debe existir también una adecuada información por parte de los organismos públicos encargados de los tributos. Se ha detectado que aún existe mucho por hacer en el aspecto patrimonial del delito que puede ser desarrollado en las investigaciones complejas, normalmente transnacionales y organizadas conforme a lo que dispone la Convención de las Naciones Unidas de la que forma parte el Protocolo de Palermo.

En materia de protección de víctimas y repatriación

En el tratamiento integral de la trata de seres humanos es esencial la consideración de la víctima. El Protocolo de Palermo ya deja claro la importancia que la víctima adquiere en todas las políticas y acciones que se lleven para la sanción del delito.

En este sentido se considera positiva la existencia de oficinas de víctimas de trata de seres humanos, que son dirigidas por los fiscales, así como que la determinación de la condición de víctima sea de consideración de los fiscales. También se estima necesario, y así aparece en la mayor parte de los Estados que poseen una ley integral contra la trata de seres humanos, que dichas oficinas se doten de presupuesto a fin de que la protección sea dada por ONG u organismos especializados bajo el control e inspección de la Fiscalía.

Hay que tener en cuenta que en la protección de la víctima cobran especial importancia los llamados periodos de restablecimiento y reflexión, así como la posibilidad que tienen las víctimas de colaborar con la justicia y de solicitar, si así lo desean, la repatriación a sus países de origen. No existen tratados de repatriación de víctimas entre los Estados consultados, aunque sí parece que hay alguna iniciativa para ello.

En materia de cooperación internacional

Si bien ya se mantuvo que la trata de seres humanos no es necesariamente un delito transnacional, lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones sí lo es. Así pues, acudir a la cooperación internacional para la investigación y persecución del delito deviene en una necesidad.

La cooperación internacional implica necesariamente generar confianza entre las autoridades judiciales de distintos Estados en los que se está llevando a cabo el delito, y afecta directamente a una parte de la soberanía del Estado, concretamente aquella que se refiere al *ius puniendi*. Sin embargo, hoy en día la cooperación internacional tiene que ser considerada en un proceso judicial no como pérdida de soberanía, sino como la realización del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y por tanto el interés de alguna de las partes en el proceso, incluyendo a la víctima, al completo esclarecimiento de los hechos.

La moderna cooperación judicial internacional se articula a través de las llamadas comisiones rogatorias, que de ordinario son remitidas entre autoridades centrales, generando esta forma de actuación retrasos importantes en las investigaciones, por lo que su eficacia disminuye considerablemente. Solo en la UE con la implantación de lo que se denomina reconocimiento mutuo y con la superación de esa forma de actuación entre autoridades centrales, para pasar a una comunicación directa entre autoridades judiciales, la cooperación judicial ha adquirido una nueva dimensión.

Pero, además, una moderna técnica de cooperación internacional la constituyen los equipos conjuntos de investigación que gozan de una completa regulación en la legislación de la UE. En Iberoamérica esta figura no es conocida. Se ha podido comprobar que sí existen investigaciones conjuntas en las que los Estados colaboran en investigaciones que afectan a ambos Estados, pero que en ningún momento suponen asumir las consecuencias que a la postre conlleva un equipo conjunto de investigación.

La posibilidad de constituir equipos conjuntos de investigación no se recoge expresamente en los tratados de cooperación internacional existentes entre los distintos Estados iberoamericanos excepto en la cooperación mutua entre el Reino de España y la República de Colombia. No obstante, y al ser una forma de cooperación, los mismos podrían encontrar apoyo legal en la más amplia obligación de cooperación que asumen los Estados en los convenios de asistencia penal.

No hay que olvidar que la propia Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional permite una cooperación más amplia no solo conforme a los acuerdos y leyes internas, sino también conforme a los arreglos a los que se pueda llegar (art. 18).

Soluciones y conclusiones propuestas

A continuación se reproducen las conclusiones que entre todos los participantes de los Ministerios Públicos fueron puestas de relieve, con las posibles soluciones a los problemas detectados.

Conclusiones sobre el tipo penal sustantivo

- No existe consenso legal respecto al bien jurídico protegido: libertad vs. dignidad. No obstante, fuera del estricto marco legal sí se está de acuerdo en que la trata de seres humanos afecta a la dignidad de la persona.
- Los bienes jurídicos son muy personales y por tanto habrá tantos delitos como víctimas existan. No es correcto determinar la existencia de una agravante según el número de víctimas constatadas.
- La tipificación del delito es compleja y eso lleva a una dificultad extra a la hora de obtener las correspondientes pruebas de cada uno de los elementos necesarios del tipo (acción, medios comisivos, finalidad). Además, esta dificultad en la descripción del tipo penal hace que sea un delito de muy difícil comprensión para jueces, pues existe un componente de conocimiento social en el mismo cuando el medio comisivo es el engaño o la situación de vulnerabilidad, que ha de combinarse con una adecuada interpretación del consentimiento de la víctima.
- Existen problemas a la hora de determinar la explotación sexual, que se liga a la tipificación del proxenetismo como delito, o la laboral, donde se confunde la explotación laboral como infracción administrativa o penal.
- Es necesario establecer un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica que no se recoge en todos los países. En consecuencia se deberán exigir planes de *compliance*.

Conclusiones respecto a la investigación

a) Cuestiones generales:

- Se constata que el sistema acusatorio donde es el fiscal quien dirige la investigación es un sistema más adecuado para la investigación de las causas complejas y de alta especialización como la trata de seres humanos.
- Es positiva la existencia de Fiscalías especializadas en materia de trata de seres humanos.
- La existencia de plazos para llevar a cabo la instrucción dificulta la investigación de causas complejas de trata de seres humanos, complicando la posibilidad de acudir a la cooperación internacional, que es sumamente lenta.

b) Cuestiones específicas:

- La prueba anticipada de la víctima es de suma importancia ya que es la prueba principal y sobre la que pivota toda la investigación. Sin embargo, se debe evitar la victimización secundaria y hacer declarar a la víctima varias veces, puesto que posibilitaría además de su revictimización el cambio de criterio. Una buena práctica es la que ha conseguido Guatemala, evitando la citación a juicio de la víctima cuando ya existe prueba anticipada realizada con todas las garantías.
- Se considera una buena práctica el uso de las salas Gesell para la declaración anticipada de la víctima, las cuales se están utilizando en muchos países.
- Es necesario hacer un esfuerzo por buscar otras pruebas que puedan suplir la declaración de la víctima, sobre todo si esta cambia de versión.
- En la investigación del delito se deben utilizar técnicas modernas de investigación; de especial trascendencia es el agente encubierto informático, puesto que se constata que en la captación cada vez más se utilizan los medios informáticos.
- Especial relevancia adquiere la intervención de las comunicaciones distintas a las telefónicas y que cada vez se utilizan más por la sociedad: WhatsApp y Facebook. Sin embargo, nos encontramos con las dificultades técnicas para seguir a tiempo real las conversaciones, así como las reticencias (por las propias empresas de telecomunicaciones) para superar esas dificultades técnicas.
- Es importante llevar a cabo una investigación patrimonial paralela a la propia investigación de la trata de seres humanos. Se considera una buena práctica la colaboración de los organismos estatales tributarios. Se necesita también una buena cooperación, colaboración y, sobre todo, comunicación con las secciones de las Fiscalías que se encargan de dichos delitos patrimoniales.

Conclusiones protección de víctimas

- La víctima no se reconoce como tal, por este motivo es necesario un abordaje social y psicológico que las ayude y que además pueda ayudar al procedimiento penal. Es un derecho de la víctima ser recuperada, por lo que se debe asegurar la financiación adecuada para ello.
- Es importante el reconocimiento del derecho de la víctima a una indemnización, realizando las diligencias cautelares necesarias sobre los bienes de los autores del delito para evitar la ocultación de los mismos.

- En todos los Estados, excepto España, son los fiscales los que determinan quién es víctima de trata de seres humanos. Esto se consigue tras valorar los informes policiales o psicológicos, posibilitándose también la audiencia directa de la víctima ante el Ministerio Fiscal.
- Por regla general no existen convenios de repatriación de víctimas. Estas se realizan caso por caso contactando con las correspondientes cancillerías. Se considera necesario impulsar estos convenios para que las repatriaciones sean seguras.
- Faltan recursos alojativos para determinadas víctimas: varones o grupos especialmente vulnerables como transexuales.

Conclusiones sobre cooperación internacional

- La cooperación internacional es necesaria para las investigaciones de trata de seres humanos con un componente transnacional. Se requiere la promoción de la misma, pues actualmente es precaria. Hay que fomentar la confianza y las investigaciones conjuntas antes de acudir a equipos conjuntos de investigación que implican una cesión de jurisdicción.
- En la cooperación internacional es importante asegurar que las pruebas se obtienen de forma que puedan hacerse valer en los tribunales del foro.
- La experiencia de Eurojust se considera positiva para facilitar la cooperación judicial internacional. Se debería fomentar la posibilidad de que alguna institución en el seno de Iberoamérica pueda facilitar la cooperación entre los distintos Estados.
- En materia de cooperación internacional es positivo el establecimiento de puntos de contacto, por lo que se valora positivamente la Red Iberoamericana contra la Trata de Seres Humanos, que debería contar con apoyo financiero.

La necesidad de establecer un modelo de colaboración transfronteriza para la identificación, asistencia y protección jurídica de víctimas de trata de seres humanos, por Susana García-Baquero y Miguel Armenteros León

Planteamiento

El objeto de este informe es establecer un modelo de colaboración transfronteriza de protección de víctimas de trata de seres humanos, tomando en consideración tres ordenamientos jurídicos, en este caso los de Ecuador, Chile y Bolivia.

Para elaborar el informe vamos a exponer, en primer lugar, la legislación interna en esta materia de cada uno de los tres Estados. En segundo lugar, haremos una breve mención a los instrumentos de cooperación jurídica internacional existentes entre dichos Estados. En tercer lugar, trataremos de diseñar un modelo común de protección teniendo en cuenta no solo el establecido en el Protocolo de Palermo, sino también el regulado en la Directiva del Parlamento y del Consejo 36/2011, en el Convenio de Varsovia, de 16 de mayo de 2005, en el Protocolo Marco Español y, especialmente, en la Ley 23/2014 de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Legislación interna de Chile, Bolivia y Ecuador

Chile

En el año 2008 el Gobierno de Chile se vio en la necesidad de instaurar y adoptar necesidades concretas en relación a la persecución y represión del delito de trata de seres humanos derivado del incremento del número de extranjeros en Chile, relacionado directamente con el aumento de inmigrantes. Igualmente se consideró que la estabilidad democrática y el desarrollo económico de Chile eran factores que auguraban un aumento de la presión democrática de Chile en el futuro. Por dicho motivo, el Estado de Chile, en cumplimiento de esta realidad y de los compromisos internacionales adquiridos en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, promulgó la Ley 20507, de 8 de abril de 2011, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas y establece normas para su persecución criminal y prevención.

En este contexto se acometen diferentes acciones, así se creó una mesa intersectorial de lucha contra la trata de seres humanos, la cual elaboró un plan de acción de lucha contra la trata a implementar a partir del año 2014, que se concretó en varios documentos, como en la *Guía de*

detección y derivación de víctimas de trata en julio del año 2016, la *Guía de buenas prácticas en investigación criminal del delito de trata de personas* en noviembre de 2014 (Ministerio del Interior y Seguridad Pública), la *Guía de actuación para fiscalizaciones intersectoriales en materia de trata de personas* (firmada por el Gobierno, Fiscalía de Chile, Policía de Chile, Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y Salud Pública, Agencia Nacional de Inteligencia), así como en el Protocolo Intersectorial de Víctimas de Trata (dirigido por la Subsecretaría de Prevención del Delito).

Pasamos a continuación a examinar cada una de estas acciones concretas.

a) Creación de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas

Mediante Decreto Supremo 2821, de 31 de julio de 2008, se crea la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (en adelante, MITP), comisión asesora de carácter permanente con composición interministerial e intersectorial, encargada de coordinar las acciones, planes y programas en materia de prevención, represión y sanción de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. La MITP, liderada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lideró la redacción del Convenio Intersectorial para Aprobar e Implementar el Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas, suscrito en Santiago el 6 de diciembre de 2013, siendo partes del mismo el Ministerio del Interior, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Menores, Servicio Nacional de la Mujer, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Agencia Nacional de Inteligencia, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ONG como Servicio Jesuita a Migrantes, ONG Raíces, Corporación Humanas, Instituto Católico Chileno, el cual ha sido implementado desde el año 2014 y comprende cuatro ejes estratégicos: prevención y sensibilización; control y persecución del delito; protección y asistencia a víctimas; y coordinación y cooperación interinstitucional. La Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas está compuesta por una Secretaría Ejecutiva y una Secretaría Técnica. Asimismo, se han establecido Mesas Regionales sobre Trata de Personas, tal y como contempla el Plan Nacional contra la Trata.

b) Reforma del Código Penal y Procesal Penal

La Ley 20507/2011, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con fecha de publicación de 8 de abril de 2011, modifica el Código Penal, tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. Concretamente, los cambios introducidos son los siguientes:

En el Código Penal:

“Artículo primero. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Incorpórase, en el párrafo 5.º, del Título III del Libro I, un artículo 89 bis, nuevo, del siguiente tenor:

Artículo 89 bis.- El ministro de Justicia podrá disponer, de acuerdo con los tratados internacionales vigentes sobre la materia y ratificados por Chile, o sobre la base del principio de reciprocidad, que los extranjeros condenados por alguno de los delitos contemplados en los artículos 411 bis, 411 ter, 411 quáter y 411 quinquies cumplan en el país de su nacionalidad las penas privativas de libertad que les hubieren sido impuestas.

2. Derógase el artículo 367 bis.

3. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 369 ter:

- a. Elimínase, en su inciso primero, la expresión ‘367 bis’.

- b. Reemplázase, en su inciso final, la referencia a la 'Ley 19366' por otra a la 'Ley 20000'.
- 4. Intercálase, en el Título VIII del Libro II, el siguiente párrafo, con los artículos que se indican:
- 5. bis. De los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Artículo 411 bis.- Tráfico de migrantes. El que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente será castigado con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. La pena señalada en el inciso anterior se aplicará en su grado máximo si se pusiere en peligro la integridad física o salud del afectado. Si se pusiere en peligro la vida del afectado o si este fuere menor de edad, la pena señalada en el inciso anterior se aumentará en un grado. Las mismas penas de los incisos anteriores, junto con la de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo, se impondrá si el hecho fuere ejecutado, aun sin ánimo de lucro, por un funcionario público en el desempeño de su cargo o abusando de él. Para estos efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 260.

Artículo 411 ter.- El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero será castigado con la pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de veinte unidades tributarias mensuales.

Artículo 411 quáter.- El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a esta, o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. Si la víctima fuere menor de edad, aun cuando no concurriere violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, se impondrán las penas de reclusión mayor en su grado medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. El que promueva, facilite o financie la ejecución de las conductas descritas en este artículo será sancionado como autor del delito.

Artículo 411 quinquies.- Los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer alguno de los delitos de este párrafo serán sancionados, por este solo hecho, conforme a lo dispuesto en los artículos 292 y siguientes de este Código.

Artículo 411 sexies.- El tribunal podrá reducir la pena en dos grados al imputado o acusado que preste cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables, o que sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de igual o mayor gravedad. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente a los fines señalados en el inciso primero. Si con ocasión de la investigación de otro hecho constitutivo de delito, el fiscal correspondiente necesita tomar conocimiento de los antecedentes proporcionados por el cooperador eficaz, deberá solicitarlos fundadamente. El fiscal requirente, para los efectos de efectuar la diligencia, deberá realizarla en presencia del fiscal ante quien se prestó la cooperación, debiendo este último previamente calificar su conveniencia. El superior jerárquico común dirimirá cualquier dificultad que surja con ocasión de dicha petición y de su cumplimiento. La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurren, o de su compensación, de acuerdo con las reglas generales.

Artículo 411 septies.- Para los efectos de determinar la reincidencia del artículo 12, circunstancia 16.a, en los delitos sancionados en este párrafo se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.

PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS

Artículo 411 octies.- Previa autorización del juez de garantía competente, el fiscal podrá autorizar, en las investigaciones por los delitos previstos en el presente párrafo, que funcionarios policiales se desempeñen como agentes encubiertos y, a propuesta de dichos funcionarios, que determinados informantes de esos servicios actúen en esa calidad. Cuando existieren sospechas fundadas de que una persona o una organización delictiva hubiere cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos indicados en este párrafo, y la investigación lo hiciere imprescindible, el tribunal, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona o de quienes integren dicha organización, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos y la grabación de comunicaciones. En lo demás, se estará íntegramente a lo dispuesto en los artículos 222 a 225 del Código Procesal Penal. Estas técnicas podrán ser utilizadas por el fiscal sea que se trate de una persona, un grupo de personas o una organización delictiva que hubiere cometido o preparado la comisión de los delitos señalados en este artículo. En todo aquello no regulado por este artículo los agentes encubiertos e informantes se regirán por las disposiciones respectivas de la Ley 20000.

Artículo segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1. Incorpórase, en el párrafo 2.o del Título IV del Libro I, el siguiente artículo, nuevo:

Artículo 78 bis.- Protección de la integridad física y psicológica de las personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas. El Ministerio Público adoptará las medidas necesarias, o las solicitará, en su caso, tendientes a asegurar la protección de las víctimas de estos delitos durante el proceso penal, teniendo presente la especial condición de vulnerabilidad que las afecta. Cuando se trate de menores de dieciocho años, los servicios públicos a cargo de la protección de la infancia y la adolescencia deberán facilitar su acceso a las prestaciones especializadas que requieran, especialmente, aquellas tendientes a su recuperación integral y a la revinculación familiar, si fuere procedente de acuerdo con el interés superior del menor de edad. En los casos en que las víctimas de los delitos establecidos en los artículos 411 bis y 411 quáter del Código Penal carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que los intereses de las personas menores de edad son independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda representarlo, el juez le designará un curador *ad litem* de cualquier institución que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de la infancia.

2. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 198, la frase 'artículos 361 a 367 bis', las dos veces que aparece, por 'artículos 361 a 367'.
3. Sustitúyese, en el inciso sexto del artículo 237, la frase '361 a 366 bis, 367 y 367 bis del Código Penal' por '361 a 366 bis y 367 del Código Penal'.

Artículo tercero.- Introdúcense, en el Decreto Ley 1094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile, las siguientes modificaciones:

1. Sustitúyese en el n.o 2 del artículo 15, la expresión 'a la trata de blancas' por la siguiente: 'al tráfico ilegal de migrantes y trata de personas'.
2. Incorpórase, en el párrafo IV del Título I, en el orden que corresponda, un artículo 33 bis, nuevo, del siguiente tenor:

Artículo 33 bis.- Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no sean nacionales o residentes permanentes en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de una residencia temporal por un periodo mínimo de seis meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su situación legal de residencia. En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito en sus países de origen.

Artículo cuarto.- Intercálase, en el artículo 5.o del Decreto Ley 2460, de 1979, Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, a continuación de la oración ‘controlar el ingreso y la salida de personas del territorio nacional’, el siguiente párrafo: ‘adoptar todas las medidas conducentes para asegurar la correcta identificación de las personas que salen e ingresan al país, la validez y autenticidad de sus documentos de viaje y la libre voluntad de las personas de ingresar o salir de él’”.

c) Instrucciones de la Fiscalía

Por Oficio 757/2015, de 7 de agosto, el fiscal nacional del Ministerio Público impartía una serie de instrucciones de las que destacamos las siguientes relativas a la materia de protección de víctimas:

“3.1 La atención y protección de las víctimas es una competencia de la Fiscalía y el apoyo de otras instituciones no puede significar una delegación constitucional de sus funciones, especialmente en cuanto a las funciones de evaluación del riesgo y a la adopción de las medidas de protección, que deben ser realizadas por profesionales de la URAVIT o por el fiscal encargado.

3.2 El profesional de la URAVIT debe actuar siempre en coordinación con el fiscal asignado al caso.

3.3 El técnico de la URAVIT debe evaluar la vulnerabilidad de las víctimas como un elemento propio del tipo penal. Esta vulnerabilidad viene determinada por un conjunto de circunstancias que la afectan y por las condiciones en las que se ejecuta el delito. Se consideran víctimas desprotegidas y cuya intervención es compleja a aquellas que:

1. Vienen de otra cultura.
2. Desconocen o tienen poco manejo del idioma.
3. Son mayormente indocumentadas.
4. Presentan desarraigo por carecer de red familiar/social de apoyo.
5. Han sufrido violencia psíquica, sexual o psicológica.
6. Son desconfiadas, reticentes a solicitar ayuda y aceptarla.
7. Son temerosas.
8. Proceden de países con altos índices de pobreza y/o inestables políticamente.

No se reconocen como víctimas porque ‘han ingresado irregularmente en el país. Realizan actividades ilegales o creen que determinados son ilícitos, como ejercer la prostitución’. ‘Pueden encontrarse intimidadas por las mafias u organizaciones criminales’. Una vez evaluadas estas circunstancias, el profesional de la URAVIT debe hacer un informe a los efectos de otorgarle los servicios de orientación protección y apoyo convenientes. Tanto el fiscal como el profesional de la URAVIT deben informar de sus derechos y obligaciones a la víctima y asistirle de intérprete con el fin de que conozca las consecuencias y riesgos de todas sus decisiones. En caso de discrepancia resolverá el fiscal regional. La situación de riesgo debe evaluarse de forma reiterada. En caso de flagrancia, el fiscal podrá adoptar las medidas que estime necesarias, sin perjuicio de su posterior comunicación a la URAVIT.

3.4 Otorgamiento de residencia: respecto de las medidas de protección de las víctimas cabe destacar el otorgamiento por un periodo mínimo de seis meses de una autorización de residencia temporal, a fin de decidir la interposición de acciones civiles y penales o iniciar los trámites para su residencia legal (Ley 20507 que incorporó su art. 33 bis en Decreto Ley 1094 de 1975). Agrega que no podrá procederse a su repatriación cuando soliciten autorización de residencia por existir grave

peligro para su integridad física o psíquica en sus países de origen. En virtud de esta norma, las Fiscalías Regionales deberán coordinarse con la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones para efectos de la tramitación de residencia temporal ante el Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior. Las solicitudes de autorización de residencia que los fiscales soliciten a la autoridad administrativa deberán ser requeridas a través de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional por medio de correo electrónico al que se adjuntarán el pasaporte, el tiempo requerido por la Fiscalía y el relato de la víctima.

3.5 Cooperación internacional: los fiscales solicitarán el apoyo de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional en todas las actuaciones de carácter internacional que deban requerir en las investigaciones penales aludidas en este oficio. En cuanto al marco jurídico internacional los Sres. fiscales deberán aplicar los siguientes tratados internacionales:

1. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ratificada por Chile en noviembre de 2014).
2. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños que complementa la citada Convención y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire de la misma Convención.

Los protocolos tienen tres finalidades: prevenir y combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata y promover la cooperación entre los Estados parte. En caso de dudas sobre la aplicación de los citados tratados, los Sres. fiscales deberán solicitar auxilio de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional que elaborará un informe técnico en este sentido.

Guía de buenas prácticas en la investigación criminal del delito de trata de personas (noviembre 2014. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mesa intersectorial):

4.1 En cada Fiscalía Regional habrá un fiscal coordinador del delito de trata al que se informará inmediatamente cuando se tenga conocimiento o sospecha de la concurrencia de este delito. El Ministerio Público tiene obligación de adoptar, o en su caso solicitar, medidas de protección para estas víctimas.

4.2 Una vez puesto en conocimiento del Ministerio Público, este debe realizar las respectivas coordinaciones con la o el jefe de la URAVIT.

4.3 Declaración de las víctimas en juicio. El testimonio de la víctima es un medio de prueba fundamental para arribar a la condena de los imputados. Es muy difícil acreditar por otros medios, el delito, circunstancias como 'haber sido engañada [la víctima] o probar la situación de vulnerabilidad en que se encontraba [la víctima]'. En efecto, en uno de los casos, el tribunal decidió absolver a los imputados respecto del delito de trata de personas cometido en contra de una de las víctimas por no contar con su testimonio.

4.4 Herramientas internacionales:

4.4.1 Asistencia mutua en materia penal: dentro de las solicitudes de asistencia mutua legal más frecuentes, se puede mencionar:

1. Solicitud de antecedentes penales de un imputado.
2. Toma de declaración a testigos o peritos en el extranjero.
3. Peritajes, notificaciones, información patrimonial, cuentas corrientes bancarias, operaciones comerciales, incautación y embargo de bienes.

4.4.2 Organismos competentes: la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional es la unidad encargada de coordinar y gestionar los requerimientos de asistencia penal internacional. En aquellos casos en que los fiscales necesiten realizar alguna solicitud internacional, deben remitir los antecedentes a UCIEX para la confección del requerimiento, el cual cita las convenciones internacionales vigentes y pertinentes, de acuerdo con el país requerido. Una vez realizado este requerimiento, se envía o dirige a través de la autoridad central, que es la institución local designada en los instrumentos internacionales, responsable del envío y recepción de las solicitudes de asistencia penal internacional, y estas se pueden comunicar mutuamente en forma directa para todos los efectos de las convenciones. En Chile la autoridad central es la Cancillería.

4.4.3 Traslados de policías al extranjero. Los fiscales del Ministerio Público podrán solicitar al fiscal regional respectivo que autorice el traslado de funcionarios policiales chilenos al extranjero, con el único objeto de que puedan presenciar la práctica de determinadas diligencias requeridas a las autoridades del Estado requerido. Previo al traslado de los policías al extranjero, debe enviarse un requerimiento formal de asistencia internacional dirigido al Estado al cual se trasladarán los funcionarios policiales, solicitando que autoricen la presencia de ellos en ese país, dejando expresa constancia de que los funcionarios policiales no realizarán en su territorio diligencia investigativa de ninguna especie. La UCIEX es la unidad encargada de la elaboración y conducción de ese requerimiento al extranjero.

4.4.4 Interpol. La Oficina Central Nacional (OCN) de Santiago tiene acceso a las siguientes herramientas de cooperación internacional para la investigación del delito de trata de personas: bases de datos de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC) - Interpol.

La OCN puede ingresar y alimentar en línea las siguientes bases de datos:

- Datos nominales (datos filiatorios, fotografías, características de los individuos) de prófugos, desaparecidos y cadáveres.
- Fichas dactilares.
- Perfiles de ADN.
- Documentos de viaje robados/ perdidos.

4.4.5 Sistema de notificaciones. La OCN puede solicitar la publicación de las siguientes alertas en el Sistema de Notificaciones de Interpol y, asimismo, puede efectuar consultas al sistema. Todo esto previa coordinación con el fiscal de la causa y UCIEX.

- Notificaciones rojas: se utilizan para solicitar la detención de individuos, con miras a su extradición.
- Notificaciones azules: se utilizan para obtener más información sobre la identidad y localización de personas de interés en una investigación.
- Notificaciones amarillas: se utilizan para localizar a personas desaparecidas.
- Notificaciones moradas: se utilizan para alertar y difundir a nivel internacional sobre nuevos *modus operandi*.
- Sistema de comunicación policial protegida I-24/7: consiste en una plataforma de comunicación exclusiva y de alta seguridad por medio del cual se intercambia y solicita información entre las Oficinas Centrales Nacionales de los 190 países miembros.

Bolivia

La preocupación por la trata de seres humanos y por la protección de sus víctimas está presente ya en la norma más importante:

a) Constitución Política del Estado, art. 15:

- Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.
- Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
- El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.
- Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna.
- Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas.

b) Código Penal de Bolivia, por Ley 1768, de 10 de marzo de 1997, anterior al vigente Código Orgánico

En la regulación del decomiso, arts. 71 y 71 bis, se hace referencia expresa al art. 185 bis, que comprende los delitos de trata de personas.

Arts. 87 y siguientes: responsabilidad civil.

Destaca el art. 91.3, que se refiere a los gastos ocasionados a la víctima para su curación, restablecimiento y reeducación.

Comentario: podría incluirse dentro de esos gastos el abono de los gastos derivados del retorno de la víctima a su país en caso de ser necesario para su curación y restablecimiento, teniendo en cuenta que la víctima ha sido trasladada forzosamente o mediante engaño a otro país. Dentro de los derechos de la restitución de la víctima debería comprenderse el relativo a la vuelta a su país de origen.

Dentro de la regulación de la organización criminal, art. 132 bis, se menciona expresamente la trata.

El artículo 185 bis, dentro de la legitimación de ganancias ilícitas, menciona también la trata.

La trata y tráfico de personas se tipifica expresamente en el capítulo V: arts. 281 bis y ss.

“Artículo 281 bis (trata de seres humanos). Será sancionado con una pena privativa de libertad de ocho (8) a doce (12) años el que por cualquier medio de engaño, coacción, amenaza, uso de fuerza y/o de una situación de vulnerabilidad, aunque medie el consentimiento de la víctima, por sí o por tercera persona induzca, realice o favorezca el traslado o reclutamiento, privación de libertad, resguardo o recepción de seres humanos, dentro o fuera del territorio nacional con cualquiera de los siguientes fines:

- a. Venta u otros actos de disposición con fines de lucro.

- b. Venta o disposición ilegal de órganos, tejidos, células o líquidos corporales.
- c. Reducción a estado de esclavitud u otro análogo.
- d. Guarda o adopciones ilegales.
- e. Explotación sexual comercial (pornografía, pedofilia, turismo sexual, violencia sexual comercial).
- f. Explotación laboral.
- g. Matrimonio servil.
- h. Toda otra forma de explotación en actividades ilegales.

La pena se agravará en un cuarto cuando la víctima sea niño, niña o adolescente; cuando el autor sea el padre, madre, tutor o quien tenga bajo su cuidado, vigilancia o autoridad al niño, niña o adolescente; el autor o partícipe fuera parte de una organización criminal, de una asociación delictuosa; y cuando el autor o partícipe sea autoridad o funcionario público encargado de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Si a causa de acciones u omisiones dolosas se produjere la muerte de la víctima, se impondrá la pena del delito de asesinato.

Si la muerte fuese producida por acciones u omisiones culposas, la pena se agravará en una mitad.

Artículo 281 ter (tráfico de migrantes). El que en beneficio propio o de tercero por cualquier medio induzca, promueva, favorezca, financie o facilite la entrada o salida del país de personas en forma ilegal o en incumplimiento de las disposiciones legales de migración será sancionado, con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.

Si a causa de acciones u omisiones dolosas se produjere la muerte de la víctima, se impondrá la pena del delito de asesinato.

Si la muerte fuese producida por acciones u omisiones culposas, la pena se agravará en una mitad".

Es interesante la tipificación por separado, en el artículo 321 bis, del tráfico de personas de quienes ejercen prostitución.

c) Código de Procedimiento Penal. Ley 1970 de 25 de marzo de 1999

Art. 11: establece como garantía de la víctima el derecho a intervenir.

Art. 36: establece que la acción civil solo la puede ejercer el damnificado. Se plantean problemas en caso de que no se ejercite por la víctima, cosa no infrecuente en este tipo de delitos.

Art. 52: la competencia, los delitos de trata, atendiendo a la pena prevista para los mismos, son competencia del Tribunal de Sentencia, integrado por 2 jueces técnicos y 3 ciudadanos. Estos tribunales conocen de delitos de acción pública castigados con pena de más de 4 años de privación de libertad.

Art. 54: los jueces de instrucción tienen competencia para conocer de las solicitudes de cooperación internacional.

Art. 69: función de la policía judicial bajo la dirección del Ministerio Público.

Art. 70: función del Ministerio Público que dirige la investigación.

Art. 77: información a la víctima, aunque no sea parte.

Art. 78: la víctima puede ejercer acción pública mediante la interposición de querrela.

Art. 81: la víctima puede disponer que sus derechos sean ejercidos por una asociación o fundación de protección de ayuda a las víctimas. No se necesita poder especial, bastando con un mero escrito.

Cooperación internacional: arts. 145 y ss., se prevén comunicaciones directas en casos urgentes.

Art. 146: testigos en el extranjero: se puede pedir que lo interroge el fiscal. Esto puede ser útil para que las víctimas puedan declarar desde su país de origen si ya se ha producido el retorno, aunque planteará dificultades para preconstituir prueba.

Art. 148: creación de equipos conjuntos de investigación en materia de organización criminal: los autoriza el Fiscalía General de la República.

Art. 307: anticipo de prueba, el fiscal la pide ante el juez. Debería emplearse siempre esta fórmula lo antes posible.

d) Ley 263, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas

Según el artículo 28, numeral III:

“El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Justicia, adoptará un Protocolo Único de Atención Especializada a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y la Ruta de Intervención, que será uniforme y aplicable en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, con validez y eficacia probatoria, evitando la revictimización, mediante interrogatorios redundantes, careos, múltiples exámenes forenses u otras formas”, concordante con la disposición transitoria tercera que señala que: “El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Justicia, aprobará el Protocolo Único de Atención a Víctimas y la Ruta de Intervención previstos en el artículo 28, en un plazo no mayor a noventa (90) días, computables a partir de la promulgación de la presente ley”.

El protocolo distingue la trata interna y la internacional. En este trabajo nos interesa especialmente la trata internacional:

El apartado 3.3.1, dentro de las etapas de la atención integral establece:

“Los consulados y las Direcciones de Migraciones establecerán políticas y procedimientos para asegurar que las víctimas de trata que no sean nacionales/residentes del país en el cual se encuentran, regularicen su situación migratoria ofreciéndoles un permiso especial atendiendo su condición de víctimas, que les permita continuar en el país, mientras se decide la protección a la cual se acogerá, teniendo tres alternativas:

- Quedarse en el país de destino.
- Retornar a su país de origen.
- Trasladarla a un tercer país.

En tanto se evalúa esta situación de retorno, permanencia y participación dentro del proceso penal a su tratante, la atención integral que empezó con la identificación debe continuar.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, la institucionalización deberá ser decidida considerando el interés superior del niño y de manera excepcional”.

En la letra e) de ese mismo apartado se hace referencia a la víctima en el proceso penal y se establece:

“Las autoridades responsables de administrar justicia deberán asegurar que la víctima sea debidamente informada acerca de los asuntos de seguridad, riesgos y procedimientos penales, antes de que la misma decida testificar o no en la sustanciación de su caso contra sus tratantes.

Si la víctima decide ser parte activa del proceso contra su tratante, se debe maximizar la seguridad y protección a su persona y su entorno, con vigilancia continua. Para ello, es necesario coordinar con las Unidades de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público que procurarán que los procesos judiciales contra aquellas personas involucradas de ninguna manera impidan y/o aplacen la reintegración familiar o el retorno de la víctima de trata al lugar de origen.

Antes (en la investigación) y durante el proceso judicial, se debe evitar el contacto directo entre la víctima de trata y el supuesto tratante, además se debe procurar la asistencia legal necesaria en lenguaje claro y si fuere posible en el idioma de la víctima. El uso de la cámara Gesell es necesaria en todas las intervenciones con la víctima”.

El apartado 4.5 establece que las Unidades de Atención de Víctimas y Testigos (UAVT), en el marco de sus competencias, deben:

- “• Preparar a la víctima para que tome la decisión de ser parte del proceso penal a partir de la denuncia explicándole sus derechos y todos los pasos que debe seguir en el proceso penal.
- Acompañamiento a la víctima durante la sustanciación del proceso.
- Seguimiento de las medidas de protección, atención y persecución, en coordinación con la DNA, en caso de niños, niñas y adolescentes, y con la instancia que se hizo cargo de la protección de la víctima mayor de edad.
- Coordinar inicio de proceso terapéutico con la DNA y SEDEGES.
- Realizar la contención en crisis cuando es necesaria.
- Evaluación final a las medidas de protección aplicadas y coordinación con instancias respectivas para continuidad a los casos que requieran.
- Propiciar el retorno de la víctima.
- Acompañar a la víctima en el desarrollo de los peritajes psicológicos sociales requeridos por el fiscal de materia asignado.
- Apoyo legal del caso, y si la víctima desiste de la denuncia, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia asumirá su papel de impulsora del proceso en referencia estricta a sus competencias legales.
- Formula conjuntamente la familia un proyecto de vida, priorizando acceso a programas educativos para su reintegración, en coordinación con la DNA.
- Realiza la evaluación final a las medidas de protección aplicadas en coordinación con instancias de referencia para continuidad en los casos que se requieran.
- Propiciar el retorno a la familia en el departamento o país de origen”.

El apartado 4.7, respecto al Ministerio Público, establece:

“El fiscal, al recibir una denuncia o información sobre la comisión de un delito, dirigirá la investigación requiriendo el auxilio de la División de Trata y Tráfico de la policía, en todos los casos informará al juez de instrucción penal el inicio de las investigaciones dentro de las 24 horas. Todas las actuaciones deberán ser coordinadas con la DNA, en caso de estar involucrados niños, niñas o adolescentes.

Informará a la víctima sobre sus derechos en el proceso penal y sobre el resultado de las investigaciones, aunque no se haya constituido en querellante. Si la víctima no quisiera seguir con el proceso, el Ministerio Público deberá proseguir de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por ley”.

“Apartado 4.9 El Servicio Estatal de Atención y Protección a Víctimas (SEDAVI), dependiente del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, tiene por finalidad otorgar a personas de escasos recursos patrocinio, orientación legal y asistencia psicológica durante el periodo de la denuncia, la investigación y el proceso penal hasta su conclusión.

Pasos a seguir:

- Actuará en caso de víctimas mayores de edad, coordinando acciones con la UAVT.
- Apoyo a la víctima (adultos).
- Emisión de información oportuna, fiable y transparente para el apoyo en la toma de decisiones [el protocolo contiene un anexo muy amplio y útil con muchas definiciones]”.

e) Ley 260. Ley Orgánica del Ministerio Público

“La Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público está encargada de promover la protección y asistencia a las víctimas de delitos, testigos, personas que colaboran con la persecución penal y servidoras o servidores del Ministerio Público, habiéndose creado al efecto las Unidades de Atención a Víctimas y Testigos. Dicha dirección tiene por atribuciones:

- Asesorar a la o al fiscal general en políticas de protección y asistencia a la víctima, testigos y miembros del Ministerio Público.
- Ejecutar y coordinar la implementación de políticas y programas de protección especializada y diferenciada, y de atención de la víctima, testigos y miembros del Ministerio Público.
- Solicitar mediante requerimiento fiscal que la Policía Boliviana brinde protección física a las víctimas, denunciantes, testigos, servidores del Ministerio Público o personas que colaboren en la persecución de delitos.
- Supervisar y evaluar la ejecución de planes y programas de protección especializada y diferenciada, y de atención.
- Promover la implementación de programas de cooperación nacional o internacional, con instituciones públicas o privadas.
- Evaluar en la víctima las necesidades de protección y atención que requiere”.

f) Ley de Migración 370, de 8 de mayo de 2013

“Artículo 55 (asistencia en delitos internacionales)

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus representaciones diplomáticas y consulares, procurará y fortalecerá las relaciones bilaterales y multilaterales para la protección y asistencia de las

víctimas de violencia, de trata y tráfico de personas y delitos conexos, así como de la persecución y sanción de delitos internacionales, mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional”.

“Artículo 68 (sanciones)

Las infracciones descritas en los artículos anteriores serán sancionadas con salida obligatoria o multas, cuya cuantía por tipo de infracción será determinada mediante reglamento de la presente Ley”.

“Artículo 69 (excepción para solicitantes de refugio y víctimas de trata y tráfico de personas)

Las personas solicitantes de refugio y las víctimas de trata y tráfico de personas no serán objeto de ninguna de las sanciones establecidas en el artículo precedente y recibirán el trato que corresponde conforme a tratados, convenios, acuerdos y normativa internacional y nacional aplicable”.

Sería deseable la incorporación en esta ley de los derechos de las víctimas de trata.

Ecuador

a) Código Orgánico Integral Penal

Título III, capítulo I, derechos de la víctima:

Amplio catálogo, donde destacan los derechos a:

“2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada caso”.

“4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la de sus familiares y sus testigos.

5. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos”.

“8. A ingresar al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y Otros Participantes del Proceso Penal, de acuerdo con las disposiciones de este Código y la ley.

9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con sus necesidades durante el proceso penal.

10. A ser informada por la o el fiscal de la investigación preprocesal y de la instrucción”.

“12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, en relación con su dignidad humana.

Si la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se permitirá su estadía temporal o permanente dentro del territorio nacional, por razones humanitarias y personales, de acuerdo con las condiciones del Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y Otros Participantes del Proceso Penal”.

Título III: reparación integral

Capítulo único

Reparación integral

“Artículo 77.- Reparación integral de los daños. La reparación integral radicaré en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características del delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado.

La restitución integral constituye un derecho y una garantía para interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en proporción con el daño sufrido.

Artículo 78.- Mecanismos de reparación integral. Las formas no excluyentes de reparación integral, individual o colectiva son:

1. La restitución: se aplica a casos relacionados con el restablecimiento de la libertad, de la vida familiar, de la ciudadanía o de la nacionalidad, el retorno al país de residencia anterior, la recuperación del empleo o de la propiedad, así como al restablecimiento de los derechos políticos.
2. La rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas mediante la atención médica y psicológica, así como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para esos fines.
3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable económicamente.
4. Las medidas de satisfacción o simbólicas: se refieren a la declaración de la decisión judicial de reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades, las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas, la enseñanza y la difusión de la verdad histórica.
5. Las garantías de no repetición: se orientan a la prevención de infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas. Se identifican con la adopción de las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de nuevos delitos del mismo género”.

Sección II del capítulo I del título IV:

“Sección segunda

Trata de personas

Artículo 91.- Trata de personas. La captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación, constituye delito de trata de personas.

Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de:

1. La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos.

2. La explotación sexual de personas, incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil.
3. La explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil.
4. Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación.
5. La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes.
6. La mendicidad.
7. Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley.
8. Cualquier otra modalidad de explotación.

Artículo 92.- Sanción para el delito de trata de personas. La trata de personas será sancionada:

1. Con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.
2. Con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años, si la infracción recae en personas de uno de los grupos de atención prioritaria o en situación de doble vulnerabilidad o si entre la víctima y el agresor ha existido relación afectiva, consensual de pareja, conyugal, convivencia, de familia o de dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral.
3. Con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años, si con ocasión de la trata de personas, la víctima ha sufrido enfermedades o daños psicológicos o físicos graves o de carácter irreversible.
4. Con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si por motivo de la trata de personas se produce la muerte de la víctima.

La trata se persigue y sanciona con independencia de otros delitos que se hayan cometido en su ejecución o como su consecuencia.

Artículo 93.- Principio de no punibilidad de la víctima de trata. La víctima no es punible por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.

Tampoco se aplicarán las sanciones o impedimentos previstos en la legislación migratoria cuando las infracciones son consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito del que fueron sujetas.

Artículo 94.- Sanción para la persona jurídica. Cuando una persona jurídica es responsable de trata, será sancionada con multa de cien a mil salarios básicos unificados del trabajador en general y la extinción de la misma”.

“Artículo 100.- Explotación sexual de personas. La persona que, en beneficio propio o de terceros, venda, preste, aproveche o dé en intercambio a otra para ejecutar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.

Si la conducta descrita se lleva a cabo sobre personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedad catastrófica, personas en situación de riesgo o se encuentren en situación de vulnerabilidad o si entre la víctima y la persona agresora se mantiene o se ha mantenido una relación consensual de pareja, de familia, conyugal o de dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral, la pena privativa de libertad será de dieciséis a diecinueve años.

Artículo 101.- Prostitución forzada. La persona que obligue, exija, imponga, promueva o induzca a otra en contra de su voluntad para realizar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años, en alguna o más de las siguientes circunstancias:

1. Cuando se aproveche de condiciones de vulnerabilidad de la víctima o se utilice violencia, amenaza o intimidación.
2. Cuando con el infractor mantenga o haya mantenido una relación familiar, consensual de pareja, sea cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, pareja o expareja en unión de hecho, de familia o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima.
3. Cuando tenga algún tipo de relación de confianza o autoridad con la víctima.

Artículo 102.- Turismo sexual. La persona que organice, promueva, ofrezca, brinde, traslade, reclute, adquiera o contrate actividades turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si las víctimas se encuentran en alguno de los siguientes casos, la pena privativa de libertad será de diez a trece años:

1. Si son niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, aun cuando hayan prestado su consentimiento.
2. Cuando se utilice violencia, amenaza o intimidación.
3. La persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho”.

Normas procesales del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador:

Arts. 414 y 415: la acción pública la ejerce el fiscal, la privada es solo para determinados delitos, entre los que no está la trata.

Arts. 432 y ss.: regulan la acusación particular.

Art. 442: la víctima tiene que ser instruida de sus derechos por el fiscal.

Art. 443: atribuciones de la Fiscalía. Prueba preconstituida: solicitar a la o al juzgador, en los casos y con las solemnidades y formalidades previstas en este Código, la recepción de los testimonios anticipados aplicando los principios de inmediación y contradicción, así como de las víctimas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

Art. 443.2: la Fiscalía dirige el sistema de protección de víctimas y testigos.

Art. 445 y ss.: regula el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (SPA-VT). Aparece en la web de la Fiscalía General del Estado de Ecuador.

Reglamento del Sistema de Protección a Testigos y Víctimas: resolución de la Fiscalía General del Estado 24, de 4 de abril de 2014:

El art 6.1.1 de este Reglamento incluye a las víctimas de trata como de atención prioritaria.

El art. 28 de este Reglamento contiene los tipos de atención de seguridad y cita, entre otros, la seguridad para traslados internacionales con acompañamiento a personas protegidas.

El art. 50, respecto a los medios económicos del SPAVT, establece que entre ellos están los que decida la FGE.

Dentro del **Código Orgánico Integral Penal**, el **art. 510.3. Reglas para el testimonio de las víctimas** establece que:

“3. La o el juzgador dispondrá, a pedido de la o el fiscal, de la o el defensor público o privado o de la víctima, medidas especiales orientadas a facilitar el testimonio de la víctima y en particular de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o víctimas de delitos contra la integridad sexual o reproductiva, trata de personas, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

4. La o el juzgador adoptará las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de hostigamiento o intimidación a la víctima, especialmente en casos de delitos contra la integridad sexual o reproductiva, trata de personas, violencia sexual, contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

5. Siempre que la víctima lo solicite o cuando la o el juzgador lo estime conveniente y la víctima lo acepte, el testimonio será receptado con el acompañamiento de personal capacitado en atención a víctimas en crisis, tales como psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras o terapeutas, entre otros. Esta norma se aplicará especialmente en los casos en que la víctima sea niña, niño, adolescente, adulto mayor o persona con discapacidad”.

Art. 519: dentro de medidas cautelares y de protección están algunas relativas a las víctimas y, entre ellas, garantizar su reparación integral.

Art. 557. Incautación:

“6. Una vez dictada la sentencia condenatoria, en caso de infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, todos los bienes, fondos, activos y productos que proceden de estos, que han sido incautados, serán transferidos directamente a propiedad del Estado y podrán ser vendidos de ser necesario”.

Art. 558 y ss.: medidas de protección sobre la víctima: alejamiento.

“En caso de delitos relativos a violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos de integridad sexual y reproductiva e integridad y libertad personal, trata de personas, la o el fiscal de existir méritos, solicitará urgentemente a la o al juzgador la adopción de una o varias medidas de protección a favor de las víctimas, quien de manera inmediata deberá disponerlas”.

La aplicación de las medidas de restricción, entre ellas la de reserva de identidad de la víctima, art. 567, menciona expresamente a las víctimas de trata.

Ley Orgánica de Movilidad Humana, de 31 de enero de 2017.

Hace referencia a las víctimas de trata desde el primer momento (capítulo I del título preliminar) y en el capítulo VI de su Reglamento aparecen las responsabilidades del Estado en cuanto a prevención, atención, protección y reinserción de víctimas de trata.

Art. 21: identificación de vulnerabilidad de ciudadanos ecuatorianos: ser víctima de trata.

Art. 24: competencia de las oficinas consulares en el exterior para coordinar la atención y protección de víctimas de trata.

Art. 39.3: repatriación a Ecuador de víctimas de trata, que se hace tutelada por el Estado.

Art. 68.2: para la revocatoria de la visa, con excepción de las víctimas de trata.

Art. 164.6: autoridad de control migratorio: competencia para combatir la trata.

Art. 165.5: competencias de los gobiernos autónomos descentralizados.

Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana: Decreto Ejecutivo 111, de 10 de agosto de 2017.

“Art. 2.- Autoridad para declaratoria de vulnerabilidad. Corresponde a la persona que ostente el cargo de viceministro de Movilidad Humana o a quienes ejerzan la jefatura de las misiones diplomáticas u oficinas consulares en el exterior atender de manera prioritaria las situaciones de vulnerabilidad cuando se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:

[...] 10. Ser víctima de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes”.

El art. 3 establece el procedimiento para la declaración de la vulnerabilidad y, entre otras cosas, establece:

“Para los casos de repatriación de personas ecuatorianas en vulnerabilidad, contemplados en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, se aplicará lo establecido para el tratamiento de excepcionalidad previsto en este Reglamento. Se considerará para ello, la valoración de riesgos, seguridad personal y familiar; se garantizará transporte asistido, alojamiento o acogimiento en el Ecuador y en el país de destino”.

Artículos 8 y ss.: casos excepcionales para repatriación de personas en situación de vulnerabilidad.

“Capítulo VI

Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes

Art. 96.- Órgano Rector. El Ministerio del Interior será el Órgano Rector en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y coordinará sus acciones y políticas con las demás entidades en todos los niveles de gobierno.

Art. 97.- De las atribuciones del Órgano Rector. Las atribuciones del Órgano Rector son:

- a. Desarrollar las políticas públicas contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y de protección a las víctimas, así como programas y proyectos para su prevención, en coordinación con la autoridad de movilidad humana.
- b. Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación de la política pública nacional referente a trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en coordinación con la autoridad de movilidad humana.
- c. Gestionar con cooperación nacional e internacional el financiamiento para planes, programas, proyectos y otras actividades de prevención de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y/o protección a sus víctimas, en el ámbito de su competencia.
- d. Crear y administrar el registro de víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
- e. Emitir lineamientos para la prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, en el ámbito de su competencia.
- f. Coordinar a nivel interinstitucional y multisectorial la protección de las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

- g. Coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados la implementación de la política pública en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en coordinación con la autoridad de movilidad humana.
- h. Coordinar con las funciones del Estado ecuatoriano procesos de capacitación sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
- i. Las demás establecidas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

Art. 98.- Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus Víctimas. Para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus Víctimas, se crea el Comité Interinstitucional, para articular la implementación, ejecución, monitoreo, control, seguimiento y evaluación de la política pública de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, de conformidad a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El Comité estará integrado de la siguiente manera:

- a. Ministerio del Interior, que lo presidirá y tendrá voto dirimente.
- b. Ministerio de Educación.
- c. Ministerio de Inclusión Económica y Social;
- d. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
- e. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
- f. Ministerio del Trabajo.
- g. Ministerio de Salud Pública.
- h. Ministerio de Turismo.
- i. Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
- j. Secretaría Nacional de Comunicación.
- k. Consejo de la Judicatura.
- l. Fiscalía General del Estado.
- m. Defensoría del Pueblo.

El Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y Protección a sus Víctimas, a través del Ministerio del Interior, podrá contar con la participación de otras entidades de las funciones del Estado e invitar a organizaciones de la sociedad civil y organismos intergubernamentales, quienes asistirán con voz informativa.

Art. 99.- Integrantes del Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus Víctimas. El Comité Interinstitucional tendrá el carácter de permanente. Las instituciones que forman parte del Comité designarán un delegado y su suplente, para lo cual bastará una delegación oficial.

Art. 100.- De las atribuciones del Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus Víctimas. El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS

- a. Elaborar, aprobar, reformar la normativa para su funcionamiento.
- b. Coordinar la implementación y socializar la política pública en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en el ámbito de sus competencias.
- c. Coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones de sociedad civil los mecanismos de prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, protección integral de sus víctimas, y demás acciones en el ámbito de su competencia.
- d. Coordinar la ejecución de convenios bilaterales o multilaterales, institucionales o multisectoriales, para la prevención, investigación de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, y la protección a sus víctimas.
- e. Las demás previstas en la normativa vigente.

Art. 101.- Registro para la identificación a víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. El Ministerio del Interior creará y administrará un Sistema Informático de Registro de Víctimas de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, en el cual se ingresará la información relevante proporcionada por cada una de las instituciones que integran el Comité Interinstitucional, a través de los medios determinados para el efecto.

El sistema permitirá a las instituciones parte del Comité consultar estadísticas sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como información actualizada que servirá de insumo para la formulación de políticas, planes, programas, proyectos y acciones a corto, mediano y largo plazo.

Art. 102.- Protección a las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes recibirán del Estado, bajo la coordinación del Ministerio del Interior y a través de los entes competentes, de forma gratuita y oportuna asistencia jurídica, humanitaria, salud integral, traductor o intérprete y otras medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica. En todas las fases del proceso se respetará el principio de confidencialidad; la información de carácter personal de las víctimas se intercambiará exclusivamente a través de los puntos focales determinados por las instituciones del Estado que intervienen en el proceso. Por ningún motivo se revelará de manera indiscriminada la información sobre las víctimas, salvo orden judicial. Se respetará el principio de interés superior del niño, niña o adolescente, garantizando la protección especial que requieren los grupos de atención prioritaria.

En los casos que las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes ingresen al Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y otros participantes del proceso penal de la Fiscalía General del Estado, esta entidad coordinará con las instituciones competentes para su debida protección, de acuerdo a lo que establece la normativa legal vigente y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

En cuanto a la protección emergente, que es el apoyo a la víctima que busca estabilizarle física y emocionalmente hasta que se recupere de su crisis inicial, esta protección se prestará sin requisito previo de denuncia de la víctima. Las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes recibirán la protección de emergencia prevista en la normativa legal vigente e instrumentos internacionales de derechos humanos. Para el cumplimiento de esta obligación el Ministerio del Interior coordinará su atención emergente con las autoridades competentes de protección, tomando en consideración los siguientes procedimientos para la protección emergente de las niñas, niños, adolescentes y personas adultas:

- a. Procedimiento para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas en el Ecuador. Una vez que el Ministerio del Interior tenga conocimiento de una víctima niña, niño o adolescente de trata de personas a través de informes, noticias, denuncias o cualquier otro medio que permita el conocimiento de este hecho, coordinará de manera inmediata con las instituciones competentes para brindarle la protección emergente.

Así también se solicitará y coordinará que en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, que el Ministerio de Inclusión Económica y Social realice el acogimiento y obtenga las medidas de protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas, a fin de garantizar los servicios de salud, legal, psicosocial; y, de acuerdo con los casos, los otros servicios que se requieran según al tipo de explotación al que fue expuesta. Dentro de las mismas veinticuatro (24) horas, el Ministerio del Interior pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente.

- b. Procedimiento para la atención y protección de las personas adultas víctimas de trata de personas en el Ecuador. Una vez que el Ministerio del Interior tenga conocimiento de una víctima adulta de trata de personas a través de informes, noticias, denuncias o cualquier otro medio que permita el conocimiento de este hecho, coordinará de manera inmediata con las instituciones competentes para brindarle la protección emergente.

Así también, se solicitará y coordinará que en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos realice el acogimiento, a fin de garantizar los servicios de salud, legal, psicosocial; y, de acuerdo con los casos, los otros servicios que se requieran de acuerdo con el tipo de explotación al que fue expuesta. La estancia en la casa de acogimiento de la víctima estará sujeta a su consentimiento.

Dentro de las mismas veinticuatro horas, el Ministerio del Interior pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente.

- c. Procedimiento para la atención y protección de las víctimas de trata de personas en el exterior. El Viceministerio de Movilidad Humana informará al Ministerio del Interior, dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, los casos de trata de personas, con la siguiente información:

1. Datos de la víctima.
2. Antecedentes del caso.

El Viceministerio de Movilidad Humana informará al Ministerio del Interior, a la brevedad posible, la fecha, medio de transporte y lugar y hora de retorno de la víctima al Ecuador.

El Viceministerio de Movilidad Humana establecerá a través de un protocolo el procedimiento interno para la atención de los casos de trata de personas ocurridos en el exterior en su ámbito de competencias.

El Ministerio del Interior, a través del área responsable del control migratorio, adoptará las medidas necesarias para viabilizar el ingreso al Ecuador de la víctima de trata de personas. Igualmente, el Ministerio del Interior pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente.

Una vez que las víctimas de trata de personas arriben al Ecuador, sean estas niñas, niños, adolescentes o personas adultas, se procederá de acuerdo a lo que establece el procedimiento para la atención y protección de los mismos de acuerdo a lo que establecen los literales a) y b) del presente artículo.

- d. Procedimiento para la atención y protección de las víctimas de tráfico ilícito de migrantes. El Viceministerio de Movilidad Humana informará, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, al Ministerio del Interior de los casos de tráfico ilícito de migrantes, con la siguiente información:

1. Datos de la víctima.
2. Antecedentes del caso.

Adicionalmente, el Viceministerio de Movilidad Humana informará al Ministerio del Interior, a la brevedad posible, la fecha, hora y lugar de retorno al Ecuador.

PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS

El Ministerio del Interior, a través del área responsable del control migratorio, coordinará el ingreso al Ecuador de la víctima de tráfico ilícito de migrantes. Igualmente, el Ministerio del Interior pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente.

Respecto de la atención, protección, restitución de derechos, se estará a lo establecido en la normativa secundaria que para el efecto dicte el Ministerio del Interior en coordinación con la autoridad de movilidad humana.

En lo referente a víctimas de tráfico ilícito de migrantes rescatadas en el Ecuador, se desarrollará la normativa secundaria que para el efecto expida el Ministerio del Interior.

Art. 103.- Seguimiento de los casos de víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos remitirá al Ministerio del Interior informes trimestrales sobre la situación de las víctimas adultas de trata de personas que se encuentran en acogimiento; así también, realizará el seguimiento de los procesos judiciales sobre las casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, para lo cual se regirá a la normativa secundaria creada para el efecto.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social remitirá al Ministerio del Interior informes trimestrales sobre la situación de las niñas, niños o adolescentes víctimas de trata de personas que se encuentran en acogimiento.

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos realizará el seguimiento de la situación de las víctimas de trata de personas, por el lapso de un año a partir de la fecha de salida de la casa de acogida, a través de los servicios especializados de protección especial y conforme a la normativa vigente. Lo mismo aplicará para los casos de tráfico ilícito de migrantes una vez que las víctimas retornen al Ecuador. En ambos casos deberá remitir informes semestrales al Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior incluirá en el sistema de registro de víctimas todos los informes presentados de los procesos judiciales y de la situación de las víctimas de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes.

Art. 104.- Permanencia de las víctimas de trata de personas. El Viceministerio de Movilidad Humana, a solicitud del Ministerio del Interior, concederá a las víctimas extranjeras de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes la visa de residencia temporal de excepción, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y este Reglamento.

Art. 105.- Retorno asistido de víctimas extranjeras de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En lo que se refiere a retorno asistido, se estará a lo establecido en la normativa internacional vigente sobre la materia, para lo cual el Ministerio del Interior coordinará con el Viceministerio de Movilidad Humana y las autoridades competentes del país de origen de la víctima su retorno en condiciones de seguridad y dignidad personal.

Para tal efecto el Ministerio del Interior, en coordinación con la autoridad de movilidad humana, desarrollará la normativa secundaria pertinente.

Para la reinserción, reparación y restitución de derechos a las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, el Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus Víctimas; las otras instituciones del Estado de acuerdo con sus competencias; y con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil y organismos intergubernamentales, coordinarán la reinserción y restitución de derechos de las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes mediante un proceso ordenado, planificado y consensuado con las víctimas, el cual apoyará a su recuperación integral en el largo plazo, en apego a los principios establecidos en la normativa vigente.

La reparación integral se desarrollará conforme a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal”.

Instrumentos de cooperación jurídica internacional entre Chile, Bolivia y Ecuador

a. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) (Protocolo de Palermo)

Este protocolo fue suscrito por Chile el 19 de noviembre de 2004, por Ecuador el 17 de septiembre de 2004 y por Bolivia el 18 de mayo de 2006. El convenio destaca tres herramientas fundamentales para la lucha contra la trata de seres humanos: prevención, persecución penal ordenada y coherente y protección de la víctima. Siendo objeto del mismo la protección de la víctima, debemos reseñar los siguientes principios programáticos declarados por el Convenio en este sentido:

1. Colaboración de sociedad civil: “Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil” (art. 9 Palermo). “La capacitación también deberá tener en cuenta la necesidad de considerar los derechos humanos y las cuestiones relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil” (art. 10.2 Palermo).
2. Formación especializada de responsables estatales: “Los Estados parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación en la prevención de la trata de personas o reforzarán dicha capacitación, según proceda. Esta deberá centrarse en los métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los traficantes y proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de las víctimas frente a los traficantes” (art. 10.2 Palermo).
3. Necesaria cooperación interestatal: “los fines del presente Protocolo son: [...] c) promover la cooperación entre los Estados parte para lograr esos fines” (art. 2 Palermo).
4. Reconocimiento de un estatuto jurídico de víctima de trata de seres humanos con independencia de trata de seres humanos con independencia de su colaboración o no con las autoridades, que se concreta en los siguientes derechos:

4.1. Derecho a la recuperación física, psicológica y social: asistencia integral e individualizada.

“Cada Estado parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de:

- a. Alojamiento adecuado.
- b. Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender.
- c. Asistencia médica, psicológica y material.
- d. Oportunidades de empleo, educación y capacitación (art. 6.3 Palermo).

“Cada Estado parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados” (art. 6.4 Palermo).

4.2. Derecho a la privacidad e identidad. Confidencialidad de los procedimientos administrativos y procesales.

“Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata” (art. 6.1 Palermo).

4.3. Derecho a la seguridad.

“Cada Estado parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio” (art. 6.5 Palermo).

4.4. Derecho a la información.

“Cada Estado parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando proceda:

- a. Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes” (art. 6.2 Palermo).
- b. “Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender” (art. 6.3 Palermo).

4.5. Derecho a la defensa de sus intereses. Asistencia jurídica gratuita.

“Cada Estado parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando proceda:

[...] b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa” (art. 6.2 Palermo).

4.6. Derecho a ser indemnizada.

“Cada Estado parte velará por que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos” (art. 6.6 Palermo).

4.7. Derecho a permanecer en el territorio en determinadas condiciones.

- “1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente Protocolo, cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda.
2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado parte dará la debida consideración a factores humanitarios y personales” (art. 7 Palermo).

4.8. Derecho al retorno y repatriación con todas las garantías.

- “1. El Estado parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o en el que esta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado parte receptor facilitará y aceptará, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad.
2. Cuando un Estado parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de personas a un Estado parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia

permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria.

3. Cuando lo solicite un Estado parte receptor, todo Estado parte requerido verificará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de personas es uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de su entrada en el territorio del Estado parte receptor.
4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de la debida documentación, el Estado parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado parte receptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado parte receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.
5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas de la trata de personas con arreglo al derecho interno del Estado parte receptor.
6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación de las víctimas de la trata de personas” (art. 8 Palermo).

b. Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile

“La República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República de Paraguay, la República Oriental de Uruguay, los Estados partes de Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, denominados en lo sucesivo ‘Estados partes’, a efectos del presente Acuerdo [...]. El presente Acuerdo tiene por finalidad la asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre las autoridades competentes de los Estados partes [...].

La asistencia comprenderá:

- a. Notificación de actos procesales.
- b. Recepción y producción de pruebas tales como testimonios o declaraciones, realización de pericias y examen de personas, bienes y lugares.
- c. Localización o identificación de personas.
- d. Notificación a testigos o peritos para la comparecencia voluntaria a fin de prestar testimonio en el Estado requirente.
- e. Traslado de personas sujetas a un proceso penal a efectos de comparecer como testigos en el Estado requirente con otros propósitos expresamente indicados en la solicitud, conforme al presente Acuerdo.
- f. Medidas cautelares sobre bienes.
- g. Cumplimiento de otras solicitudes respecto de bienes.
- h. Entrega de documentos y otros elementos de prueba.
- i. Incautación, transferencia de bienes decomisados y otras medidas de naturaleza similar.

- j. Aseguramiento de bienes a efectos del cumplimiento de sentencias judiciales que impongan indemnizaciones o multas.
- k. Cualquier otra forma de asistencia acorde con los fines de este Acuerdo que no sea incompatible con las leyes del Estado requerido” (arts. 1 y 2).

c. Protocolo de Cooperación Interinstitucional para Fortalecer la Investigación, Atención y Protección a Víctimas del Delito de Trata de Personas entre los Ministerios Públicos Iberoamericanos AIAMP-REMPM (realizada en Santiago de Chile los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2011)

En virtud de este documento, los Ministerios Públicos de los países formantes se comprometen a intercambiar información en relación a los siguientes puntos:

- Sobre los países de origen de la víctima: situación sociofamiliar, motivos de la salida y proceso de captación.
- Sobre los países de destino en relación a su forma de ingreso en el país: documentación, grupo de explotadores, actividad de explotación y formas de control.

Los países firmantes se comprometen a utilizar determinadas líneas de investigación que contemplen la investigación patrimonial de los investigados, comiso de bienes, funcionamiento de locales de explotación, capacitación de los investigadores, etc.

En relación a la víctima se comprometen a:

1. Primer contacto a través de equipos especializados diferentes de los actores involucrados en la investigación (policías, fiscales, jueces) y con conocimiento en el campo de atención a víctimas de violencia contra la mujer (en los casos de trata con fines de explotación sexual).
2. Implementación de acciones para el ejercicio de los derechos básicos de la víctima.
3. Fomentar la efectiva aplicación de la cláusula de no punibilidad de las víctimas de trata de personas.
4. Instar por la regularización de la situación migratoria en caso de ser ilegal.
5. Grabación de la primera declaración con el objeto de disminuir el número de declaraciones a realizar.
6. Evaluación especializada de riesgos e implementación de las medidas oportunas de seguridad y protección.
7. Información de derechos y del proceso penal en términos adecuados para la víctima.
8. Asistencia legal gratuita para las víctimas en el proceso penal y en otros procesos convergentes: reparación civil, acciones derivadas de su proceso de regularización.

d. Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos (documento aprobado en la XVI asamblea general ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), 9 y 10 de julio de 2008)

En relación a las Guías de Santiago, vamos a detenernos exclusivamente en el tratamiento a víctimas de trata, víctimas extranjeras e indígenas y en el apartado de cooperación internacional:

- a) Víctimas de trata de seres humanos:

“La trata de personas afecta tanto a mujeres como a hombres, tanto a mayores como a niños y adolescentes. La finalidad es la explotación de la persona. Supone la cosificación de la persona y la abolición de su libertad. La explotación se concreta fundamentalmente en la obtención de un beneficio a partir de su utilización sexual, como mano de obra e incluso su cuerpo como mercancía. El ámbito del área conoce cada vez más la problemática derivada del denominado ‘turismo sexual’.

Se observan ciertas deficiencias legislativas, productoras de vacíos, en la definición delictiva de conductas referidas al tráfico ilegal de mano de obra y al empleo de menores a tal fin. Debe deslindarse adecuadamente, con respeto a los principios de especialidad y proporcionalidad, el ilícito administrativo del ilícito penal.

La víctima de estos delitos se caracteriza muchas veces por su resistencia al contacto con las Instituciones, siendo remisa a confiarles tanto el hecho como su persecución, así como a implicarse en un proceso de recuperación personal dirigido institucionalmente. En muchas ocasiones, la víctima es extraída de su entorno, con serias dificultades de recolocación, ya que a ello se suma, en no pocas ocasiones, la existencia de situaciones de ilegalidad sobre su presencia en el país. La opción de retorno de las víctimas se ve, finalmente, obstaculizada tanto por motivos de seguridad en el mismo como por su mera ejecución material.

El Ministerio Público debe asumir la presencia de estas víctimas en el proceso valorando tanto su escasa predisposición a la colaboración como la fugacidad de su disponibilidad, por lo que debe articular oportunos mecanismos de prueba preconstituida con plenas garantías para todas las partes a fin de que la persecución penal de la conducta sea eficaz, la víctima no sea sometida a procesos de revictimización y la propia dilación y reiteración de actuaciones suponga tanto un riesgo para su seguridad como un riesgo de ineficacia para el propio proceso. Es decisiva tanto la colaboración externa que se puede obtener de toda una estructura de organizaciones no gubernamentales como la institucional de entidades como la Organización Internacional de Migraciones”.

b) Especial referencia a las víctimas extranjeras.

“La víctima extranjera está afectada, en principio, por un plus de vulnerabilidad por varios factores:

- Al hallarse fuera de su entorno, tiene un déficit de información sobre los pasos a dar, además de que el mero hecho de su desubicación aumenta el factor angustia ante el encuentro con lo ocasional y excepcional que es el delito.
- Cuando su presencia en el país va unida a un factor de temporalidad o coyunturalidad, se complica su disponibilidad en relación con el proceso, lo que puede hacer críticas sus posibilidades de ser fuente de información en la fase de investigación, intervenir eficazmente en el proceso como medio de prueba y ejercitar los derechos que como víctima le puedan corresponder.
- Cuando a las circunstancias anteriores se une cualquier aspecto de ilegalidad administrativa en relación con la presencia del extranjero en el país, aumenta el riesgo de impunidad por un expreso deseo de la víctima de no relacionarse con el aparato oficial del Estado. Ante tales premisas, los Ministerios Públicos deben llevar a cabo actuaciones en el siguiente sentido:
 1. La información debe ser especialmente eficaz para salvar las barreras idiomáticas y de falta de comprensión de un ámbito social y de cultura diferentes.
 2. La red de información debe adecuarse a las circunstancias de movimiento y presencia de los extranjeros, haciendo que la misma esté disponible en ellos. A título de ejemplo, se hace referencia a los lugares de entrada y salida, estaciones de transporte, centros de acogida o internamiento, etc.
 3. Los países del entorno, bajo un principio de solidaridad, protección del nacional y reciprocidad, deberían establecer unas reglas mínimas de asistencia a víctimas y vías de

colaboración entre Ministerios Públicos o a través de las estructuras que en cada uno estén especializadas en atención a víctimas.

4. La intervención de la víctima en el proceso debe estar caracterizada por los siguientes factores:
 - Celeridad en la evacuación de trámites.
 - Plasmación de actuaciones bajo criterios que procesalmente puedan hacerlas valer como prueba anticipada.
 - Agilización de mecanismos de cooperación internacional, con el uso de tecnologías que, bajo las debidas garantías, permitan incluso la actuación remota de la víctima.
 - Habilitación de oficinas en países extranjeros que puedan actuar como corresponsalía, utilizando cualesquiera redes disponibles, ello a fin de que se facilite la recogida de manifestaciones de cualquier naturaleza en el Estado de residencia del nacional.
 - Procedimientos acelerados para la recuperación y transferencia de propiedades que sean consideradas como vestigios relacionados con el delito.
5. La legislación que regula la presencia y los derechos de los extranjeros en cada Estado debe contemplar adecuadamente la pendencia de procesos criminales en los que el extranjero pueda aparecer como víctima, adoptando medidas que establezcan el adecuado equilibrio entre la posibilidad de retardar la salida del sujeto del territorio nacional y la evitación de situaciones de fraude que tiendan a prolongar indebidamente esa estancia sobre la base de un acontecimiento de esta naturaleza”.

c) Especial referencia a las víctimas indígenas.

“La presencia de ciudadanos de esta condición en una parte importante de los Estados representados hace necesario valorar su situación como eventuales víctimas en situación de vulnerabilidad. Bajo un principio de reconocimiento de la igualdad y del hecho diferencial, el tratamiento que debe dispensarse a estos ciudadanos como víctimas debe responder a unos patrones mínimos:

1. La existencia de un Estado soberano que ejerce el imperio de la ley con universalidad e igualdad para el conjunto de la ciudadanía no se entorpece, sino que se realiza más eficazmente a través del respeto a los usos y costumbres de este sector de la ciudadanía.
2. Es aconsejable, si no imprescindible, la existencia de consultores técnicos que evalúen en cada caso el mejor encaje de la realidad acaecida con los parámetros culturales de la etnia, tanto para valorar la trascendencia del hecho como las expectativas de los sujetos implicados en el mismo.
3. El lenguaje no puede ser nunca un obstáculo, por lo que no solo se ofrecerá una traducción que permita la comunicación entre los interlocutores, sino que esta será capaz de colocar a la víctima en idónea capacidad de comprender el ámbito jurídico especializado ante el que se encuentre.
4. Sin menoscabo de los principios fundamentales ni de los derechos de todas las partes, la aplicación de medidas de protección, composición y cualesquiera otras que al amparo de la condición de víctima deban articularse en el proceso se acomodarán en lo posible, a los criterios de cultura, valorando cómo las estructuras sociales de estas comunidades pueden llegar a acoger las herramientas de la legislación del Estado o aplicando incluso el derecho indígena cuando la legislación del Estado da pie para ello.
5. En los procesos mixtos, donde se entremezclan sujetos indígenas con no indígenas, debe cuidarse especialmente que no se dé ningún trato discriminatorio en beneficio de ninguna de las partes”.

d) **Ámbito de cooperación internacional.**

“En el ámbito de la cooperación internacional, los/las representantes de los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP deberán:

- Implementar legal y operativamente, haciendo uso de los mecanismos de asistencia judicial recíproca y otros previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en especial aquellos relacionados con la reubicación internacional de los testigos y la prestación de testimonio de testigos nacionales en país extranjero y testigos extranjeros en territorio nacional.
- Designar, si aún no lo han realizado, la autoridad central para la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos con el mandato específico de absolver todos aquellos requerimientos provenientes de países miembros solicitando la reubicación internacional de testigos y/o la realización de diligencias procesales que involucren la rendición de testimonio.
- Promover la organización de y participar en actividades de carácter bilateral, regional e internacional encaminadas a fomentar el intercambio de mejores prácticas entre programas de protección de testigos.
- Adoptar y utilizar los instrumentos legales modelo, guías y manuales preparados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en materia de protección de testigos, en su calidad de custodia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Poner en marcha solicitudes conjuntas y diseño de estrategias regionales de búsqueda de recursos internacionales para el financiamiento de programas de cooperación técnica en materia de protección de testigos.
- Trabajar en la armonización de sus procedimientos legales y operativos de protección de testigos”.

e) **IberRed**

Bolivia, Ecuador y Chile forman parte de IberRed. Las autoridades centrales en relación con la delincuencia organizada son en el caso de Bolivia el Ministerio de Relaciones Exteriores; en el caso de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores; y en el caso de Ecuador, la Fiscalía General del Estado.

Referencia al modelo de la Unión Europea

Como ya se ha indicado, uno de los objetivos del presente trabajo es efectuar una referencia al modelo de protección comunitario respecto a si es posible establecer un modelo semejante en el ámbito de los países a los que estamos aludiendo.

En este sentido, la respuesta inicial debe ser negativa, porque evidentemente esa protección comunitaria, regulada en España en la Ley 23/2014, está basada en la firma de tratados internacionales en el marco de la UE. De este modo, solo con la firma de un tratado internacional podría garantizarse un verdadero modelo efectivo de traslado de la protección.

El modelo comunitario está basado en el principio de reconocimiento mutuo, que a su vez tiene su base en la confianza mutua entre los Estados miembros.

El primer instrumento jurídico de la UE en el que se plasma este principio en el ámbito del derecho penal es la Decisión Marco 2002/584/JAI, relativa a la orden europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros. Posteriormente tenemos la Decisión Marco 2003/577/JAI, de 22 de julio de 2003, relativa a ejecución en la UE de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas; la Decisión Marco 2005/214/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación de reconocimiento mutuo de resoluciones pecuniarias; la Decisión Marco 2006/783/JAI, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso; la Decisión Marco 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la UE; la Decisión Marco 1008/947/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada; la Decisión Marco 2008/978/JAI, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal; la Decisión Marco 2009/299/JAI, de 26 de febrero de 2009, que modifica algunas de las decisiones marco anteriormente mencionadas; la Decisión Marco 2009/829/JAI, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre los Estados miembros de la UE, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancias como sustitución de la prisión provisional. Es necesario mencionar la Directiva Europea 36/2011 sobre protección de víctimas de trata de seres humanos, que deroga la Decisión Marco 2002/458/JAI. Asimismo, contamos con la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección.

Por lo tanto, podemos comprobar fácilmente que la existencia de un sistema de protección comunitario está basado en una amplia evolución y desarrollo normativo en el marco de la UE, por lo que sin la existencia de un tratado internacional firmado entre los países iberoamericanos a los que se refiere este trabajo será imposible asegurar una verdadera eficacia en cualquier intento de transmisión de la protección a la víctima entre Estados.

La orden europea de protección aparece configurada como una resolución en materia penal dictada por una autoridad judicial o equivalente de un Estado miembro de la UE en relación con una medida de protección que faculta a la autoridad competente de otro Estado miembro para adoptar las medidas oportunas a favor de las víctimas de determinados delitos cuando se encuentren en su territorio. Dicha orden se puede emitir tanto de medidas cautelares como de penas privativas de derechos.

La necesidad de establecer protocolos comunes de actuación

No cabe duda de que la existencia de un tratado de cooperación y reconocimiento mutuo de resoluciones entre los países a los que se refiere este estudio sería sin duda un paso básico para lograr la transmisión de la protección de un país a otro, pero también hay que tener en cuenta que la protección efectiva en relación con las víctimas de trata de seres humanos no se restringe solo a medidas o penas relacionadas con prohibiciones de aproximación o comunicación, que es en esencia lo que contempla la orden europea de protección, sino que las medidas deben extenderse a las que se refieren en sí a protección de testigos, como la tutela de los datos de identidad y de localización del mismo, así como un seguimiento y vigilancia policial de su situación, lo que se puede lograr a través de la coordinación entre los Ministerios Públicos de los países afectados, aprovechando las importantes funciones que los mismos tienen en el ámbito de dirección de las oficinas o servicios de protección de testigos, lo que no ocurre en todos los países del ámbito de la UE. Con esto queremos decir que el hecho de que un país reconozca de forma oficial la vigencia y efectividad de una resolución de otro Estado no va a garantizar una verdadera protección de la víctima si no va acompañada de medidas concretas para asegurar dicha tutela.

Por este motivo, estimamos que más importante que imponer una orden de protección común, o como paso previo, es la instauración de un protocolo común de protección a la víctima para los tres países.

Según la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea:

“Más de una década después de que el Tratado de Ámsterdam previera la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, los Estados miembros, y entre ellos España, siguen reforzando sus mecanismos de cooperación judicial a través de la aplicación de sus dos principios básicos: la armonización de legislaciones y el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.

El principio de reconocimiento mutuo, basado en la confianza mutua entre los Estados miembros y consagrado en el Consejo Europeo de Tampere como la “piedra angular” de la cooperación judicial civil y penal en la Unión Europea, ha supuesto una auténtica revolución en las relaciones de cooperación entre los Estados miembros, al permitir que aquella resolución emitida por una autoridad judicial de un Estado miembro sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro, salvo cuando concurra alguno de los motivos que permita denegar su reconocimiento. Finalmente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ha supuesto la consagración como principio jurídico del reconocimiento mutuo, en el que, según su artículo 82, se basa la cooperación judicial en materia penal.

Este nuevo modelo de cooperación judicial conlleva un cambio radical en las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea, al sustituir las antiguas comunicaciones entre las autoridades centrales o gubernativas por la comunicación directa entre las autoridades judiciales, suprimir el principio de doble incriminación en relación con un listado predeterminado de delitos y regular como excepcional el rechazo al reconocimiento y ejecución de una resolución, a partir de un listado tasado de motivos de denegación. Además, se ha logrado simplificar y agilizar los procedimientos de transmisión de las resoluciones judiciales, mediante el empleo de un formulario o certificado que deben completar las autoridades judiciales competentes para la transmisión de una resolución a otro Estado miembro.

En el ámbito penal, según lo dispuesto en el programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal, dicho principio ha de ser de aplicación en cada una de las fases del proceso penal, tanto antes, como durante e incluso después de dictarse la sentencia condenatoria.

II

La primera vez que en el ámbito del derecho penal se plasmó este principio en un instrumento jurídico de la Unión Europea fue en la Decisión Marco 2002/584/JAI, relativa a la orden europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, por un proceso de entrega dotado de mayor rapidez y seguridad jurídica. Esta norma fue inmediatamente incorporada al derecho español a través de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega y la Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la anterior.

La segunda decisión marco adoptada en este ámbito fue la Decisión Marco 2003/577/JAI, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas, que permite que la autoridad judicial del Estado de origen adopte una resolución acordando la realización de un embargo provisional en otro Estado miembro de aquellos bienes que bien vayan a ser objeto de un ulterior comiso, o bien vayan a ser utilizados como prueba en juicio. Su incorporación al derecho español se efectuó a través de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas en procedimientos penales y la Ley Orgánica 5/2006, de 5 de junio, complementaria de la anterior, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En tercer lugar, la Decisión Marco 2005/214/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, permitió al Estado requirente acudir a la autoridad judicial del Estado en que la persona obligada al pago de una sanción pecuniaria derivada de la comisión de una infracción penal (o administrativa en determinados casos) tuviera elementos patrimoniales, obtuviera ingresos o tuviera su residencia habitual para ejecutar dicha sanción. La transposición de esta norma a nuestro derecho se realizó mediante la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias y la Ley Orgánica 2/2008, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la anterior.

Un año después, la Decisión Marco 2006/783/JAI, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, permitiría que una resolución dictada en un Estado acordando el decomiso de una serie de bienes fuera reconocida y ejecutada por un Tribunal del Estado en el que se encontrasen los bienes afectados. Esta ha sido hasta hoy la última decisión marco sobre reconocimiento mutuo de resoluciones penales transpuesta en nuestro país, a través de la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso y la Ley Orgánica 3/2010, de 10 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y complementaria de la anterior.

En el año 2008 fueron varias las decisiones marco sobre reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales adoptadas en materia penal. En primer lugar se aprobó la Decisión Marco 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea. Esta permite que una resolución condenatoria por la que se impone a una persona física una pena o medida privativa de libertad sea ejecutada en otro Estado miembro cuando ello contribuya a facilitar la reinserción del condenado. Junto a ella, se adoptó también la Decisión Marco 2008/947/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas, que permite transmitir a otro Estado miembro distinto del de la condena la responsabilidad de vigilar el cumplimiento por el condenado de las medidas de libertad vigilada o de las penas sustitutivas previamente impuestas en el primero. Por último, en el 2008 vería la luz la Decisión Marco 2008/978/JAI, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal, que consiste en una resolución judicial emitida por la autoridad competente de un Estado miembro con objeto de recabar objetos, documentos y datos de otro Estado miembro para su uso en un proceso penal.

En 2009 se aprobó en este ámbito la primera decisión marco modificativa de otras anteriores, la Decisión Marco 2009/299/JAI, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado. Entre estas normas se encuentra también la Decisión Marco 2009/829/JAI, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional, que permite supervisar a las autoridades judiciales de un Estado miembro aquellas resoluciones adoptadas en un proceso penal celebrado en otro Estado miembro por las que se imponga a una persona física una o más medidas de vigilancia de la libertad provisional.

Finalmente, como consecuencia de los cambios que introdujo el Tratado de Lisboa en la estructura de la Unión Europea y en sus instrumentos normativos, el 13 de diciembre de 2011 se aprobó la primera directiva en este ámbito. Se trata de la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección, que también se incorpora a esta Ley, y que tiene por objeto extender la protección que a través de las medidas pertinentes haya impuesto la autoridad competente de un Estado miembro para proteger a una persona contra posibles actos delictivos de otra, al territorio del Estado miembro al que se desplace esa persona para residir o permanecer durante un determinado periodo de tiempo.

Ante esta prolífica tarea normativa de las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros tienen la obligación de afrontar una intensa labor legislativa para incorporar a sus ordenamientos las disposiciones aprobadas hasta el momento. En España, además, si la técnica normativa empleada hasta ahora en la transposición de las cuatro primeras decisiones marco no variase, ello implicaría una enorme producción normativa, no solo por las múltiples leyes que habrían de adoptarse, sino también por las consiguientes leyes orgánicas complementarias que someterían a constantes modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por ello, se ha decidido modificar la técnica normativa empleada hasta ahora en la incorporación de estas normas europeas, persiguiendo tanto garantizar una mejor transposición como reducir la dispersión normativa y la complejidad de un ordenamiento que, a la postre, tiene que permitir a los distintos operadores jurídicos su tarea de aplicar el derecho en un ámbito ya de por sí complejo y nuevo.

De este modo, la presente Ley da por amortizada la técnica de la incorporación individual de cada decisión marco o directiva europea en una ley ordinaria y su correspondiente ley orgánica complementaria, y se presenta como un texto conjunto en el que se reúnen todas las decisiones marco y la directiva aprobadas hasta hoy en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones penales. Incluye tanto las ya transpuestas a nuestro derecho como las que están pendientes, evitando la señalada dispersión normativa y facilitando su conocimiento y manejo por los profesionales del derecho. Además, se articula a través de un esquema en el que tiene fácil cabida la incorporación de las futuras directivas que puedan ir adoptándose en esta materia.

Esta Ley va acompañada además de una ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, que evita las continuas reformas a las que esta tendría que verse sometida si la tarea de transposición se realizase de manera individualizada.

III

La Ley parte de un breve título preliminar, para estructurarse a continuación en una serie de títulos. El primero de estos títulos contiene el régimen tanto de la transmisión como del reconocimiento de las resoluciones penales en la Unión Europea, incluyendo normas de aplicación a los distintos instrumentos, pero también de ámbito más reducido en relación con solo uno o varios de estos instrumentos. De esta forma, en cada caso concreto, los aplicadores están llamados a seguir tanto estas normas generales que aseguran la coherencia del conjunto como las disposiciones específicas de cada uno de esos instrumentos.

Los títulos siguientes regulan cada uno de los instrumentos de reconocimiento mutuo, siguiendo un esquema idéntico en el que se distinguen unas normas comunes, otras destinadas a indicar a la autoridad judicial competente en cada caso cómo transmitir a otros Estados de la Unión Europea una resolución de reconocimiento mutuo y, por fin, otras que establecen las reglas de ejecución en España de las resoluciones que transmitan las autoridades competentes de los demás Estados miembros. La parte final de la Ley contiene tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y trece anexos. Estos últimos incorporan los formularios o los certificados que habrán de emplear las autoridades judiciales españolas para la transmisión de las resoluciones judiciales o para realizar aquellas notificaciones exigidas por la Ley.

IV

El título preliminar contiene las disposiciones básicas que conforman el régimen jurídico del reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. La Ley enumera cuáles son esas resoluciones judiciales que luego regula, establece el respeto a los derechos y libertades fundamentales como criterio principal de actuación, la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia, así como qué ha de entenderse por Estado de emisión y de ejecución. No se olvida la Ley de la necesidad de conocer la dinámica de estas formas de cooperación judicial mediante su reflejo en datos estadísticos.

V

El título I contiene las normas generales de la transmisión y del reconocimiento y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo en la Unión Europea. Se hace aquí un esfuerzo de identificación de los elementos comunes que se encuentran en las diferentes normas de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal. Estas disposiciones han venido a generalizar reglas que las decisiones marco de la Unión Europea habían recogido con formulaciones dispares y cuya incorporación acrítica habría generado diferencias carentes de justificación, complicando al mismo tiempo la aplicación de esta Ley.

De esta forma, en este título se reconocen las características básicas del nuevo sistema de cooperación judicial basado en el reconocimiento mutuo. Sus artículos contienen las reglas comunes que rigen tanto la transmisión de las órdenes europeas y resoluciones judiciales a otros Estados miembros como su ejecución en España, los motivos generales de denegación del reconocimiento y la ejecución, y las normas sobre recursos, gastos e indemnizaciones y reembolsos, entre otras.

La competencia tanto para la transmisión como para la ejecución de los distintos instrumentos de reconocimiento mutuo se distribuye entre los jueces y tribunales y el Ministerio Fiscal. La ley generaliza la audiencia previa al fiscal cuando sea un juez o tribunal el que esté conociendo de alguno de los referidos instrumentos.

Especial relevancia tiene el listado de categorías delictivas a las que no será de aplicación el principio de doble tipificación, en el que se expresa el compromiso básico de los países de la Unión Europea de renunciar a la exigencia del control de la doble incriminación para una serie de infracciones. De este modo, aquellas resoluciones judiciales dictadas en otros Estados miembros y transmitidas a España para su reconocimiento y ejecución no estarán sujetas al control de la doble tipificación por el juez o tribunal español, en la medida en que se refieran a alguno de los delitos enumerados y siempre que se cumplan las condiciones exigidas para cada tipo de resolución judicial. Como consecuencia de la actuación del principio de reconocimiento mutuo la decisión de la autoridad competente de reconocer y ejecutar la orden europea acordada por la autoridad judicial extranjera es casi automática sin necesidad de verificar su conformidad con su ordenamiento jurídico interno, y se limitan los supuestos de denegación de la ejecución de la decisión transmitida a causas tasadas y estrictamente previstas en esta Ley.

Estas normas generales ponen de manifiesto la peculiaridad del reconocimiento mutuo derivada de la relación directa entre autoridades judiciales de los diferentes Estados. Una característica cuya puesta en práctica requiere la comunicación inmediata de las distintas decisiones que se adopten en cada caso y las consultas previas en muchos supuestos en tanto que permitirán a las autoridades competentes valorar la conveniencia o no de recurrir a estos instrumentos.

La importancia de estos preceptos de aplicación al conjunto de instrumentos de reconocimiento mutuo se pone de manifiesto por su contenido, que comprende cuestiones como las notificaciones, traducciones, régimen de recursos, supuestos comunes de suspensión o de denegación de la ejecución de una resolución transmitida en nuestro país, entre otros.

VI

El título II es el primero que se dedica ya a un instrumento en concreto, que es la orden europea de detención y entrega, cuyas normas no solo siguen lo que hasta ahora ha regulado la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega, sino que también se ha llevado a cabo su puesta al día, en atención a la experiencia ya acumulada en esta materia. Ello ha supuesto el reforzamiento de las garantías jurídicas, en especial con la introducción del criterio de la proporcionalidad, algunas mejoras de técnica normativa y otras modificaciones que persiguen mejorar la aplicación práctica de la norma. Se perfecciona así este procedimiento que permite a cualquier autoridad judicial española solicitar la entrega de una persona a otro Estado miembro para el seguimiento de actuaciones penales o para el cumplimiento de una condena impuesta, así como proceder a la entrega cuando haya recibido una orden europea de detención y entrega procedente de la autoridad judicial de otro Estado miembro.

VII

El título III tiene por objeto las resoluciones para el cumplimiento de penas o medidas privativas de libertad. A través de estos preceptos se incorpora una decisión marco no transpuesta hasta ahora, que permite que una resolución condenatoria dictada en un Estado miembro sea ejecutada en otro Estado miembro, con el fin de facilitar así la reinserción social del condenado. Las autoridades judiciales españolas, por tanto, podrán transmitir sentencias condenatorias a otros Estados, cuando en ellas se impongan penas o medidas privativas de libertad y se cumplan las condiciones señaladas por la ley, debiendo ejecutar asimismo aquellas que del mismo modo les hayan sido transmitidas.

VIII

Por su parte, el título IV contiene las normas de la llamada resolución de libertad vigilada, que establecen el régimen de la transmisión y ejecución de resoluciones adoptadas en el marco de medidas consecutivas a la condena. Este título contiene tanto el procedimiento por el que las autoridades judiciales españolas pueden transmitir una resolución por la que se imponga una medida de libertad vigilada o una pena sustitutiva como el procedimiento de ejecución de dichas resoluciones en España cuando hayan sido dictadas en otros Estados miembros. El reconocimiento mutuo de estas resoluciones tiene por objeto incrementar las posibilidades de reinserción social del condenado al permitirle mantener sus lazos familiares, lingüísticos y culturales, así como mejorar el control del cumplimiento de las medidas de libertad vigilada y de las penas sustitutivas con objeto de evitar la reincidencia, teniendo en cuenta el principio de la protección de las víctimas.

IX

El título V es el dedicado a la resolución sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional, que permite que un Estado distinto al que impuso la medida de vigilancia pueda supervisar su cumplimiento cuando así le sea solicitado y siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos. De este modo, se consigue una mejor ordenación de la actuación de los Estados en este ámbito penal y se evita que un residente en un Estado miembro se vea sacado de su entorno como consecuencia de la comisión de una infracción penal durante el tiempo que transcurra hasta la celebración del juicio. Con ello también se logra una mayor seguridad pública al permitir que persona sometida a actuaciones penales en un Estado miembro distinto al de su residencia sea vigilada por las autoridades de este último en espera de la celebración del juicio, evitando acudir a institutos más represivos como la prisión provisional o más inseguros como la libertad provisional no vigilada.

X

El título VI regula la transmisión y ejecución en otro Estado miembro de una orden europea de protección. Esta orden es una resolución penal que puede adoptar la autoridad competente de cualquier Estado miembro en relación con una medida de protección previamente adoptada en ese Estado, por la que se faculta a la autoridad competente de otro Estado miembro para adoptar las medidas oportunas a favor de las víctimas o posibles víctimas de delitos que se encuentren en peligro, cuando se hayan desplazado a su territorio. Esta regulación permite que las medidas de protección adoptadas a favor de una víctima la acompañen en cualquier lugar de la Unión Europea al que se desplace, ocasional o permanentemente. El causante de este peligro también tendrá que enfrentarse a las consecuencias del incumplimiento de esta orden europea.

Las medidas que se prevén se caracterizarían por su flexibilidad para adaptarse a las necesidades de protección de la víctima en cada momento, lo que supone que también la autoridad competente pueda acordar su prórroga, revisión, modificación o revocación. De esta forma, se garantiza que las medidas de protección dictadas en cualquier Estado miembro a favor de una persona que se vea amenazada sean efectivas en todo el territorio de la Unión.

XI

El título VII establece el régimen de reconocimiento de la resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas, en el que se incluyen, con algunas modificaciones, las disposiciones de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en los procesos penales. Mediante este mecanismo se transmitirán por las autoridades judiciales españolas las medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas acordadas en procedimientos penales a otros Estados miembros en los que puedan encontrarse los objetos, datos o documentos objeto de la medida. Igualmente se determina la forma en la que las autoridades judiciales españolas van a reconocer y cumplir tales resoluciones cuando provengan de una autoridad judicial de otro Estado miembro. Es importante destacar cómo el concepto de medida de aseguramiento aplicada a este instrumento comprende las medidas que afectan a aquellos bienes del procesado que sean suficientes para cubrir su responsabilidad pecuniaria. Las exigencias del reconocimiento mutuo llevan a comprender en este instrumento una amplia gama de diligencias aseguratorias del cuerpo del delito, tales como su recogida, bloqueo, conservación, intervención, incautación o puesta en depósito judicial. Todo ello con las debidas garantías que protegen los derechos que asisten a las partes y a los terceros interesados de buena fe.

XII

El título VIII se destina a prever el régimen de la resolución de decomiso e incorpora, con algunas adaptaciones, el contenido presente en la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. De este modo, regula el procedimiento a través del cual se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales españolas, aquellas sentencias firmes por las que se imponga un decomiso a otros Estados miembros de la Unión Europea, y establece el modo en el que las autoridades judiciales españolas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando le sean transmitidas por otro Estado miembro. Ya es sabida la incidencia que las normas de la Unión Europea han tenido en esta materia a la hora de precisar el concepto de decomiso, que alcanza a bienes que provienen de actividades delictivas desarrolladas por la persona condenada durante un periodo anterior a la condena, o cuando se tenga constancia de que el valor de la propiedad es desproporcionado con respecto a los ingresos legales de la persona condenada y una autoridad judicial nacional, basándose en hechos concretos, esté plenamente convencida de su procedencia delictiva. En cambio, quedan fuera de esta ley los supuestos de restitución de bienes a sus legítimos propietarios.

La Ley también incorpora las novedades mediante las cuales se tratan de remediar los problemas derivados de las dudas de localización de los bienes objeto de decomiso, y ante los cuales se permite que una autoridad judicial transmita su resolución simultáneamente a varios Estados miembros de la Unión Europea. Una previsión que, a su vez, obliga a que haya una mayor comunicación entre las autoridades judiciales para evitar excesos de ejecución.

XIII

El título IX tiene por objeto regular la resolución por la que se exige el pago de una sanción pecuniaria, incorporando con leves modificaciones el contenido de la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias. Estas normas determinan el procedimiento a través del cual se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales españolas, aquellas resoluciones firmes por las que se exija el pago de una sanción pecuniaria a una persona física o jurídica como consecuencia de la comisión de una infracción penal a otros Estados miembros de la Unión Europea en los que esa persona posea propiedades, obtenga ingresos o tenga su residencia habitual. Igualmente, se regula el procedimiento mediante el cual las autoridades judiciales españolas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando les sean transmitidas por otro Estado miembro y el condenado tenga esas propiedades, ingresos o residencia en nuestro país.

Se ha de aclarar que el concepto de sanción pecuniaria de este instrumento no se refiere solamente a aquella cantidad de dinero exigida en concepto de multa impuesta como consecuencia de

la comisión de una infracción, sino también a la impuesta en la misma resolución en concepto de costas judiciales, como compensación en beneficio de las víctimas o destinada a un fondo público u organización de apoyo a las víctimas. Además, las sanciones impuestas pueden derivar de la comisión de una infracción de carácter penal o administrativa, en los términos que se regulan.

XIV

El último título, el X, regula el exhorto europeo de obtención de pruebas que incorpora una nueva decisión marco al regular las normas sobre la transmisión y ejecución de aquella resolución que las autoridades españolas pueden enviar o recibir de otro Estado miembro con objeto de recabar objetos, documentos y datos para su uso en un proceso penal. El exhorto europeo de obtención de pruebas podrá referirse también a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea por la comisión de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, cuando la decisión pueda dar lugar a un proceso ante un órgano jurisdiccional en el orden penal. No así en el caso de las infracciones administrativas cometidas en España, pues en nuestro derecho las autoridades administrativas competentes no se encuentran en la situación prevista en la norma europea, ya que sus resoluciones son recurribles en vía contencioso-administrativa y no en vía penal; lo que ha impedido su inclusión dentro de este mecanismo de cooperación. Destacar que la intervención siempre del juez o fiscal español en la ejecución de esta resolución cuando sea transmitida por otro Estado permite prescindir del requisito de la validación por parte de esa autoridad de emisión, pues el juez o el fiscal ya valoran la proporcionalidad de la medida solicitada y si comporta limitación de derechos fundamentales.

XV

Se ha de hacer una mención a los anexos que cierran la Ley y en los que se contienen los modelos de los formularios y los certificados a través de los cuales se efectúan las comunicaciones entre autoridades judiciales en la Unión Europea. Se trata de formularios y certificados idénticos en todos los países, por lo que son perfectamente comprensibles a partir del modelo traducido a cada lengua, dotando a esa relación de mayor agilidad y seguridad jurídica.

XVI

En definitiva, la presente Ley se configura como un instrumento integrador que, además de dar cumplimiento a las obligaciones normativas europeas, responde al compromiso de mejora de la cooperación judicial penal en la Unión Europea y la lucha contra la criminalidad, garantizando la seguridad y los derechos de los ciudadanos como fin irrenunciable del Estado”.

En este sentido, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) (Protocolo de Palermo), que fue firmado por los tres países implicados (en Chile, el 19 de noviembre de 2004; en Ecuador, el 17 de septiembre de 2004; y en Bolivia, el 18 de mayo de 2006), enfoca la lucha contra la trata de personas desde una perspectiva pluridimensional que descansa en estos tres pilares: prevención, persecución penal ordenada y protección de la víctima.

A su vez, el Protocolo proclama una serie de principios programáticos necesarios en la lucha contra la trata de seres humanos, que son:

1. Persecución penal y uniforme de la trata (ya que las diferencias en el tratamiento jurídico del delito y en los programas de protección de las víctimas entre los diferentes Estados dificultan su persecución).
2. Colaboración de la sociedad civil (se fomentará la colaboración de las sociedades no gubernamentales, arts. 9 y 10 del Protocolo de Palermo).

3. Formación y capacitación especializada de los responsables estatales en esta materia, especialmente en la protección de víctimas de trata (art. 10.2 del Protocolo de Palermo).
4. Necesaria cooperación interestatal (art. 2 del Protocolo de Palermo).
5. Reconocimiento de un estatuto jurídico de la víctima de trata de seres humanos con un contenido diferente según la fase de investigación, que transcurre desde su identificación, su derivación a un recurso pertinente, la apertura del proceso penal y el juicio oral (art. 6 del Protocolo de Palermo).

Por tanto, y en base a lo expuesto, debemos considerar que la protección de la víctima de trata a todos los niveles, tanto asistencial, policial, judicial como procesal, no es solo una garantía de respeto de derechos universales, sino que es también una herramienta eficaz de lucha y persecución penal de la trata de seres humanos, de ahí la importancia de unificar los modelos de protección de la víctima en los tres Estados.

Para acometer esta tarea es preciso imponer un modelo común de protección integral con respuestas unitarias en los tres países y que a continuación pasamos a abordar señalando los puntos que forzosamente deben ser coincidentes en los tres países.

¿Qué es una víctima de trata de seres humanos?

Una víctima de trata de seres humanos es aquella persona que ha sufrido una acción dolosa de aquellas que de manera coincidente y uniforme con el convenio de Palermo recoge el art. 411 quáter del Código Penal chileno, el Código Penal de Bolivia y el Código Penal de Ecuador.

Las características que convierten a estos sujetos pasivos del delito en víctimas especiales y que obligan a los Estados a establecer herramientas específicas de protección y diferenciadas como herramienta policial, judicial y procesal de persecución del delito son las siguientes:

1. **Elemento de extranjería.** La trata de seres humanos es un fenómeno transnacional, de grandes dimensiones, en el que están implicadas redes que intervienen tanto en los países de origen como de tránsito y destino, aunque al contrario que el tráfico de migrantes no se precisa de un cruce de fronteras; sin embargo, al suponer un traslado, transporte, cesión, acogida o alojamiento de una persona, puede afirmarse que el porcentaje más elevado de víctimas proceden del extranjero, ya que el control de su persona y su explotación se ejerce alejando a la persona de su entorno social o familiar donde tiene protección y colocándola en lugares distanciados de su sitio de procedencia, con el fin de ponerla en situación de desamparo y vulnerabilidad y no darle más opción que someterse a la explotación del tratante.
2. **Perspectiva de género.** La trata constituye un negocio sexual basado en el cuerpo femenino como objeto de consumo. Por otra parte, está vinculado al problema de la prostitución, como actividad delictiva que busca lucrarse comerciando con la mujer y vulnerando gravemente sus derechos y su dignidad.
3. **Desigualdad, pobreza, persistencia en la discriminación e imposibilidad de acceder a los recursos más elementales en sus lugares de origen.** El Oficio 757/2015 del fiscal nacional de la Fiscalía de Chile, de 7 de agosto de 2015, establece que:

“Su vulnerabilidad viene determinada por un conjunto de circunstancias que la afectan y por las condiciones en las que se ejecuta el delito. Se consideran víctimas desprotegidas y cuya intervención es compleja a aquellas que:

1. Vienen de otra cultura.

2. Desconocen o tienen poco manejo del idioma.
3. Son mayormente indocumentadas.
4. Presentan desarraigo por carecer de red familiar/social de apoyo.
5. Han sufrido violencia psíquica, sexual o psicológica.
6. Son desconfiadas, reticentes a solicitar ayuda y aceptarla.
7. Son temerosas.
8. Proceden de países con altos índices de pobreza y/o inestables políticamente”.

- 4. Imposibilidad o dificultad para autorreconocerse como víctima de trata.** Como pone de manifiesto el Oficio 757/2015 del fiscal nacional de la Fiscalía de Chile: “Han ingresado irregularmente en el país. Realizan actividades ilegales o creen que determinados actos son ilícitos, como ejercer la prostitución, y pueden encontrarse intimidadas por las mafias u organizaciones criminales”.

¿Qué es un sistema de protección integral de la víctima de trata de seres humanos?

Es una herramienta de carácter fundamentalmente procesal en cuya implantación intervienen instituciones de diferentes ámbitos como el policial, asistencial, sanitario, fiscal o judicial, laboral, de igualdad y protección de la mujer, así como la competente en la regularización de extranjeros.

Su finalidad no es solo garantizar el respeto a los derechos fundamentales universales de las víctimas, sino que también son un elemento muy eficaz en la lucha contra el delito, motivo por el que se recomienda la elaboración de planes uniformes de protección de las víctimas en los tres países.

¿Cuáles son las fases para la implantación de un sistema eficaz de protección integral de las víctimas de trata de seres humanos?

Dado que los procedimientos penales por este delito no suelen comenzar de forma proactiva (con la interposición de denuncia), sino que se inician de oficio por las autoridades competentes, es importante establecer desde el inicio un sistema eficaz de protección de víctimas que, por lo general, no se reconocen como tales. En este sentido, los expertos proponen la implantación en los tres países de un sistema uniforme y coincidente con el regulado en el Pacto de Varsovia, de 16 de mayo de 2005, firmado en el ámbito del Consejo de Europa y en el Protocolo Marco del Estado Español, de forma que la concesión por cualquiera de los tres Estados del estatuto de víctima de trata de seres humanos pueda ser reconocida y homologada en otro Estado dada la homogeneidad de todos los procedimientos.

Las fases para la implantación de este sistema las clasificamos en las siguientes:

Fase de detección o identificación

Es el momento inicial en que la autoridad competente o los miembros de sociedades no gubernamentales reconocen a una persona en situación vulnerable como víctima potencial de trata de seres humanos según una serie de indicios o signos externos que concurren en su persona, en el lugar en que se encuentra, actividad que ejerce, personas que la controlan, etc. En esta primera fase debemos destacar los siguientes puntos:

1. Lugares y circunstancias donde las instituciones competentes pueden identificar a víctimas potenciales de trata de seres humanos: en fronteras, centros de inmigrantes, centros de trabajo durante el transcurso de una inspección laboral, clubs de alterne, control de población extranjera realizada en centros de trabajo, salones de masajes, pisos, prostitución callejera, centros de menores, etc.
2. Autoridades competentes para la identificación de víctimas potenciales mediante el análisis de los indicios concurrentes y la realización de las entrevistas pertinentes a las víctimas potenciales. En la legislación de Chile, Ecuador y Bolivia se atribuye esta facultad a las Unidades de Víctimas dependientes de las Fiscalías de los Ministerios Públicos (URAVIT, en el caso de Chile, etc.). Sin embargo, con el Protocolo de Cooperación Interinstitucional para Fortalecer la Investigación, Atención y Protección a Víctimas del Delito de Trata de Personas entre los Ministerios Públicos Iberoamericanos AIAMP-REMPM (realizada en Santiago de Chile los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2011), los países firmantes se comprometieron a que el primer contacto con la víctima potencial de trata se realizaría a través de equipos especializados diferentes de los actores involucrados en la investigación (policías, fiscales, jueces) y con conocimiento en el campo de atención a víctimas de violencia contra la mujer (en los casos de trata con fines de explotación sexual). De acuerdo con este compromiso, los expertos recomiendan la creación de dichas unidades, las cuales serán advertidas de la localización de víctimas potenciales de trata y se desplazarán a los lugares indicados para completar la identificación.
3. En cuanto a los indicios que deben valorarse y a la práctica de entrevistas, nos remitimos a los proclamados por la ONU y recogidos en el Protocolo Marco Español, adjuntado en los anexos I y II de este informe.

Fase de derivación

Una vez identificada de forma inicial la víctima potencial de trata de seres humanos, la misma será derivada, con su consentimiento, a la Fiscalía Regional competente encargada de la protección de víctimas, donde se evaluará su situación de vulnerabilidad y se reconocerá —o no— su estatuto de víctima de trata de seres humanos. Tales son las competencias que el fiscal nacional de la Fiscalía de Chile atribuye a las URAVIT por Oficio 757/2015, de 7 de agosto, las cuales actuarán bajo supervisión del fiscal encargado del caso, y si hubiera discrepancia la resolverá el fiscal regional.

El reconocimiento por parte del fiscal regional del estatuto de víctima de trata de seres humanos supone la atribución de los siguientes derechos, con independencia de la interposición o no de denuncia:

1. Derecho de asistencia básica de manutención, médica, psicológica y jurídica gratuita (tanto en el proceso penal como en el de su regularización de su situación jurídico-administrativa).
2. Derecho de información de los derechos y del proceso penal.
3. Derecho provisional de estancia o residencia en tanto la víctima decide lo que estime pertinente en cuanto a la interposición de acciones civiles y penales (en Chile se reconoció este derecho con la Ley 20507 que incorporó su art. 33 bis en el DL 1094 de 1975).
4. Derecho de retorno a su país de origen en condiciones de seguridad, debidamente acompañada por miembros de sociedades no gubernamentales o incluso funcionarios de policía o de la oficina de asistencia a la víctima bajo las órdenes del fiscal.
5. Derecho a no ser expulsada si existiera riesgo de persecución o peligro para su integridad en su país de origen. Para ello el fiscal regional podrá cursar a la autoridad administrativa las peticiones de asilo o de otra naturaleza que correspondan.
6. Este estatuto de víctimas de trata reconocido por el fiscal regional será especialmente considerado por el resto de los Ministerios Públicos del resto de países firmantes (Chile, Ecuador

o Bolivia) a través de la colaboración de las respectivas Fiscalías, en cuanto a facilitar el retorno y acogida en su país de origen, así como en cuanto a la posibilidad de iniciar investigaciones penales en relación con los actos cometidos en dichos países y personas responsables que en él se encuentren y a adoptar medidas de protección de las víctimas relativas a presuntos implicados que se encuentren en dichos países.

7. Los Ministerios Públicos podrán intercambiar información en relación con la víctima, debiendo comunicar al Ministerio Público del Estado del país de origen y trasvasar información relativa a su país de origen (su situación sociofamiliar en su país de origen, salida de su país de origen, proceso de captación), país de destino (lugar y forma de ingreso, documentos administrativos y laborales, lugar de explotación, identidad de culpables, investigación patrimonial, etc.), situación de la víctima (Protocolo de Colaboración Interinstitucional para Fortalecer la Investigación, Atención y Protección a Víctimas en el Delito de Trata de Personas entre los MMPP de la República de Bolivia, Chile, Paraguay y República Dominicana con fecha de 23 de noviembre de 2009).
8. Según las *Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos*, firmadas en julio de 2008 por la AIAMP, se establecerán mecanismos para que la información sea “especialmente eficaz para salvar las barreras idiomáticas y de falta de comprensión de un ámbito social y de cultura diferentes”.
9. La red de información debe adecuarse a las circunstancias de movimiento y presencia de los extranjeros, haciendo que la misma esté disponible en ellos. A título de ejemplo, se hace referencia a los lugares de entrada y salida, estaciones de transporte, centros de acogida o internamiento, etc.

Los países de retorno, bajo un principio de solidaridad, protección del nacional y reciprocidad, deberían establecer unas reglas mínimas de asistencia a víctimas y vías de colaboración entre los Ministerios Públicos o a través de las estructuras que en cada uno estén especializadas en atención a víctimas.

Fase de investigación penal

Una vez iniciada la fase de investigación penal y reconocida como tal a la víctima de trata de seres humanos, debemos insistir en una protección integral de la víctima y nos detendremos especialmente en los siguientes puntos:

- 1.1. La consideración como víctima de trata de seres humanos y el reconocimiento de su estatus debe hacerse constar en un registro especial, que será compartido a los MMPP de los países implicados de origen, procedencia o traslado, así como a las autoridades competentes en los trámites de extranjería y retorno.
- 1.2. Su declaración se registrará por el principio de mínima intervención, se grabarán tanto la imagen como el sonido, se garantizará la separación visual con los investigados y sus letrados y la víctima será acompañada por personal de la Oficina de Víctimas.
- 1.3. Se le informará de sus derechos procesales de personación en el proceso, de justicia gratuita y de reparación.
- 1.4. Se le informará y podrá optar al retorno a su país en condiciones de seguridad.
- 1.5. En cuanto a la posible aplicación de una orden de protección y sus efectos a nivel internacional, es preciso decir que las órdenes de protección solo afectan a las personas investigadas, pero no a personas ajenas al proceso que pueden residir en el país de origen o tránsito de la víctima y que no son parte del proceso.

No obstante, serán comunicadas a los MMPP de dichos países para su conocimiento a fin de que puedan iniciar también la correspondiente investigación en relación con las personas implicadas que residan en los mismos y a efectos de protección si la víctima ha optado por el retorno.

Fase de juicio oral

En esta fase deben revisarse las medidas de protección y se tendrá especial cuidado en su declaración, que se hará evitando el contacto visual con los acusados y sus letrados y preferentemente por videoconferencia desde el lugar donde resida o desde su país de origen.

Conclusiones

Una vez analizada la legislación interna de los tres países, así como la legislación de cooperación internacional, las herramientas comunes y la propia normativa europea, emitimos las siguientes conclusiones:

- Para una eficaz protección de las víctimas de trata de seres humanos sería necesario unificar el modelo de sistemas de protección integral, estableciendo un sistema común y unitario en los tres países, en la forma expuesta en el punto 6, consiguiendo de esta forma unificar todos los sistemas, de la misma forma que lo hace en el ámbito de la UE la Directiva 36/2011.
- La comunicación directa entre los Ministerios Públicos desde el momento inicial de localización de una víctima de trata de los países garantiza recabar información sobre su entorno, conocer las circunstancias que propiciaron su captación y establecer medidas de amparo y de retorno en condiciones de seguridad.
- Deben agilizarse las formas de transmisión de resoluciones judiciales a efectos de cooperación penal internacional y de reconocimiento de resoluciones judiciales, procurando una comunicación directa entre autoridades, al margen de organismos centrales.
- Si bien la existencia de una orden internacional de protección aplicable de forma directa en otros países sería un instrumento eficaz de protección, estimamos más relevante y prioritario participar de un modelo común de protección integral de la víctima en cada una de sus fases de identificación, derivación, investigación penal y juicio oral, con herramientas comunes y actuaciones uniformes.
- La existencia de una red de lucha contra la trata de seres humanos y la posibilidad de derivar a la víctima a recursos de uno u otro país, agilizando el cruce controlado de fronteras en condiciones de seguridad y alejando a la víctima de sus tratantes es una herramienta útil y de fácil implantación y coordinación en los tres países en los que la protección de la víctima es competencia del Ministerio Público.

EL PACCTO



EUROPA ↔ LATINOAMÉRICA

PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO

EL PACCTO es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que persigue promover la seguridad ciudadana y el Estado de derecho en América Latina a través de una lucha más efectiva contra el crimen transnacional organizado y de una cooperación fortalecida en la materia. Cubre los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Es la primera vez que un programa regional europeo trabaja en toda la cadena penal para fortalecer la cooperación mediante tres componentes (cooperación policial, cooperación entre sistemas de justicia y sistemas penitenciarios) con cinco ejes transversales (ciberdelincuencia, corrupción, derechos humanos, género y lavado de activos).

Programa liderado por



FIIAPP
COOPERACIÓN ESPAÑOLA



**EXPERTISE
FRANCE**



iila
organización internacional de la policía judicial



CAMÕES
INSTITUTO
DA COOPERAÇÃO
E DA LINGUA
PORTUGAL
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS



PROGRAMA FINANCIADO
POR LA UNIÓN EUROPEA